



Universidad Nacional de Rosario
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales

Licenciatura en Ciencia Política

Néstor Kirchner y la CGT de Moyano

Alumna: Clarisa Diez

Directora: Dra. María Gabriela Benetti

Rosario, 2016

Indice

Introducción	5
Estado del arte.....	6
Desarrollo del trabajo.....	9
I. La Transversalidad	11
1. Crisis de representación y elección presidencial.....	11
2. El inesperado presidente Kirchner.....	14
3. La reconstrucción del lazo.....	15
4. La re-configuración del espacio político.....	16
5. El acercamiento de dirigentes sindicales y organizaciones piqueteras.....	19
II. La re-composición del conflicto	23
1. La institucionalización de la acción sindical.....	24
2. La reapertura del diálogo.....	33
La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros –FNTC-.....	34
3. La recuperación de espacios institucionales y atributos económicos.....	36
La derogación de la ley Banelco.....	37
Negociaciones colectivas y la convocatoria al Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.....	38
Reunificación de la CGT.....	43
Subsidio al TAC.....	45
4. Los límites a la acción sindical y la posición del Estado.....	46
Moyano vs. Carrefour.....	47
Moyano vs. Coto.....	50
Moyano vs. Lavagna.....	52
5. La recuperación de la calle.....	53
La incorporación de las organizaciones piqueteras y la canalización del conflicto sindical.....	54
Reflexiones finales	59
Bibliografía.....	63

Simplemente porque no podría haber llegado este día sin el apoyo incondicional de toda mi familia, que me bancaron y me bancan, siempre aplaudiendo en primera fila, siempre listos para la discusión política y social.

A mi amor que vive el día a día de la política argentina conmigo.

A mis compañeros de estudio, de marcha, de vida por su confianza, mates y risas.

A Gaby y Alicia que no permitieron que ni el tiempo ni la distancia me apartaran de mi objeto de estudio.

¡Gracias totales!

*A Rosi y Juan,
Que sólo cuando descubrí mi propio color me contaron su historia*

Introducción

En 2003 Néstor Kirchner alcanzaba la presidencia con un margen del 22% de votos positivos en un llamado a elección anticipado por la grave crisis de representación política que atravesaba el país. A pesar de haber asumido la presidencia, más por el concierto de circunstancias casuales y la preeminencia de un voto rechazo, sorprendió desde el principio por la espectacularidad de las decisiones que traspasaban pactos corporativos y partidarios y una alta voluntad política, marcando el comienzo de un nuevo estilo de liderazgo (Cheresky, 2008:49).

Argentina aún enfrentaba la crisis de legitimidad desatada a fines de 2001 que propició la salida anticipada de Fernando de la Rúa. El desempleo y la pobreza en ascenso junto a la pérdida de legitimidad de los más altos cargos del poder del Estado eran el corolario del estado de corrupción, desconfianza y disgregación social, producto de la política neoliberal del menemismo. El cuestionamiento a la institución presidencial y la insolvencia de la convertibilidad¹ dio paso al caos social, institucional y económico. La desocupación alcanzaba el 21,5%.

La crisis puso fin al compromiso fallido asumido por el gobierno de la Alianza de terminar con la corrupción, los privilegios y el abuso de poder que caracterizaron los años 90. Frente a ello, Kirchner "(...) tuvo la habilidad de instalarse en un espacio de crítica al neoliberalismo (...). Esta retórica tuvo la capacidad de interpretar a gran parte del campo militante (...)" (Svampa, 2008:19).

¹ La ley de convertibilidad monetaria fue puesta en práctica en 1994 por el Ministro de Economía Domingo Cavallo bajo la presidencia de Carlos Menem. Marcaba la paridad cambiaria 1 a 1 dólar-peso argentino de la mano de la apertura económica al mercado internacional. Las consecuencias fueron, entre otras tantas, la sobrevaluación del peso y la pérdida de competitividad en el mercado internacional, el ingreso masivo de empresas de capitales extranjeros y la quiebra de la industria nacional, la modificación de la estabilidad laboral por la implementación de políticas de flexibilización, el incremento del desempleo y la aparición del subempleo y el trabajo en negro, etc., etc.

Dado el contexto y la urgencia por fijar el rumbo económico e institucional, Kirchner “ubicó al Estado como la entidad capaz de reconstruir ese proyecto nacional” (Pérez, Natalucci, 2010:98). En ese sentido, si no puede tratarse como una refundación institucional, sí puede afirmarse que se asistió a “una profunda renovación política e institucional” (Cheresky, 2008: 53). El liderazgo kirchnerista se desarrolla en circunstancias muy diferentes a los liderazgos precedentes en las democracias institucionalizadas y, por ello, las especulaciones giraban en torno a la débil legitimidad de origen y a la dependencia política de la estructura peronista de la provincia de Buenos Aires. De manera contraria, Kirchner enfrentó la situación de crisis por medio de la toma de decisiones rápidas y eficaces, supo leer el clima de descontento y desmoralización social, estableciendo un estilo político propio en base a la autoridad presidencial, buscando la confrontación y generando un vínculo directo con la ciudadanía. Decisiones que transgredían acuerdos corporativos y partidarios interpelando a la opinión pública como el reposicionamiento del Estado a favor de los derechos humanos, la renovación de la Corte Suprema de Justicia y el cuestionamiento al FMI y las corporaciones transnacionales, el llamado a la pluralidad y a la reconstrucción de la institucionalidad. Así también la reapertura del espacio para el conflicto gremial y la recuperación del rol del sindicato como interlocutor clave del Gobierno nacional.

Con la presente investigación, esperamos contribuir al estudio de la relación entre el Gobierno nacional y la Confederación General del Trabajo durante el periodo presidencial de Néstor Kirchner (2003-2007). Nuestro objetivo es explorar la influencia, el impacto y la función de la CGT dirigida por Hugo Moyano en el proceso de construcción de poder y liderazgo presidencial de Néstor Kirchner.

Estado del arte

Los estudios sobre liderazgos en los Estados democráticos contemporáneos son variados, como también las distintas perspectivas teóricas que estudian el vínculo y el entrecruzamiento entre las organizaciones políticas y las organizaciones sindicales. Las perspectivas de Isidoro Cheresky, Novaro, Martuccelli y Svampa, Benetti, Benes

y Fernández Milmanda nos aportan desde interpretaciones más que oportunas en la aproximación al caso Kirchner-Moyano.

Trazamos el rumbo de la investigación desde la perspectiva de Cheresky según la cual, a partir de 2003, aparece en Argentina un nuevo tipo de liderazgo. El autor toma la crisis de 2001 como punto de inflexión en el lazo de representación política y la presidencia de Kirchner como el exponente de un nuevo tipo de liderazgo: el *liderazgo de popularidad*. Las características del líder de popularidad pueden ser resumidas durante el gobierno de Kirchner observando: el casi inexistente soporte organizacional, el establecimiento del vínculo casi directo con la ciudadanía y la eficacia respecto a la opinión pública. El estilo personal y el crédito en la ciudadanía son las bases de su poder, al tiempo que cuenta con la "capacidad para instituir o redefinir la identidad política que pretende liderar" (Cheresky, 2008:37).

También retomamos la perspectiva que considera el carácter institucional de la representación y la decisión personal de los actores políticos como condición intrínseca en la constitución de las identidades políticas y liderazgo. Novaro (2000) señala al vínculo actual representante-representado como necesariamente mediado por la "escenificación" -nuevo rol ejercido por la opinión pública-. La "escenificación" conforma los vínculos de representación en su relación directa con el rol de los líderes, quien la interpela y define las identidades e intereses que va a representar.

Martuccelli y Svampa (1997) nos aportan respecto de la conformación de las identidades políticas desde la revisión que realizan sobre la identidad peronista y el modelo nacional-popular. La mirada hacia el espacio históricamente reivindicado por el peronismo, fundado en el poder simbólico de la movilización de multitudes, nos genera interrogantes: ¿cómo se presenta el espacio político y los actores participantes en 2003? ¿Cuáles son las estrategias puestas en juego desde el gobierno de Kirchner respecto a las organizaciones de trabajadores, particularmente la CGT? Desde una interpretación estrictamente política y aludiendo a estrategias basadas en acciones sorpresivas y eficaces, incluso contradictorias, se remite a acciones precedentes ante la necesidad de recrear el espacio de liderazgo: "reforzando o debilitándolos, se trata de subordinar los actores sociales al líder" (Martuccelli y Svampa, 1997:44). El análisis plantea que la "crisis de legitimidad

señala el momento en el cual se disipa la creencia en la justicia de la distribución social (...) o en el cual la debilidad de un orden político para imponer una definición de la realidad abre una fase de contestación. Cualquiera que sea el origen final de la "crisis de legitimación", el régimen se enfrenta a la necesidad de lograr un nuevo consenso" (Martuccelli, Svampa, 1997:100).

En 2003 Kirchner asume la presidencia de la Nación sumida en crisis institucional y enfrenta la urgencia de generar un nuevo consenso en el campo político-social. Considerando al sindicalismo como el actor político que despliega toda su capacidad de reacción y transformación en el sistema político, "ya sea por inflexión del justicialismo, por la alianza con otro partido o por la constitución de un nuevo bloque político desde los sindicatos" (Martuccelli, Svampa, 1997:300). ¿Cuál es el desafío al que se enfrenta la CGT de Moyano?, ¿cuáles son las prácticas que pone en juego?, ¿se mueve desde el modelo tradicional sindical o desde una nueva matriz? Gabriela Benetti estudia el modelo sindical tradicional desde la relación Estado nacional-organizaciones sindicales y los arreglos institucionales en que dicha relación se basa. La autora analiza esta relación a partir de dos momentos del arreglo institucional. El primero tiene lugar durante el primer peronismo e instaura un "modelo sindical estructurado en base a la organización por ramas, la personería gremial otorgada por el Estado y las convenciones colectivas de trabajo" (Benetti, 2012:18). Modelo que concedió capacidad de poder político e identitario a las organizaciones gremiales, principalmente a la CGT. El segundo momento aparece con la crisis del modelo sindical tradicional desde la llegada al poder de Carlos Menem y el cuestionamiento de los postulados del arreglo anterior que "se expresa en un desigual retiro del Estado de su papel de garante, empresario y regulador de la actividad económica, en la revisión de su compromiso con la integración social y en la reformulación de aspectos sustantivos del arreglo institucional hasta entonces vigente para el mundo del trabajo" (Benetti, 2012:18/19). Esta perspectiva nos permite repensar el arreglo institucional durante el gobierno de Kirchner: ¿nos encontramos ante un tercer momento en el arreglo institucional sindical o un retorno a la primera etapa del sindicalismo tradicional? Benes y Fernández Milmanda (2012) afirman que la conducción de Moyano ha sido beneficiada por la reestructuración

estatal y productiva llevada adelante durante los años 90, resultando en representante de un sector social y políticamente relevante en la determinación de la política laboral. Los autores recorren la conformación de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y dan cuenta de las modificaciones que se producen en el balance de poder sindical a partir de la desindustrialización y la apertura económica del gobierno de Menem.

La producción académica sobre las organizaciones sindicales se ha visto notablemente reducida a partir de la modernización del Estado en los 90 y la disminución de su injerencia política. Al momento del inicio del estudio, el análisis del espacio social radicaba fundamentalmente en el surgimiento de nuevos actores que detentan la misma o mayor capacidad de movilización y protesta que los actores sindicales. El interés académico por la temática resurge a partir de la centralidad propiciada por los gobiernos *kirchneristas* a la cuestión laboral. Análisis contemporáneos producidos por autores como Lucca (2012), Iglesias (2013), Basualdo (2012), Palomino (2005/2006), Levitsky (2004) son referencia directa del presente trabajo.

Sin dejar de lado estudios esenciales en el análisis clásico sobre los distintos aspectos del movimiento obrero desde sus orígenes por autores como Ricardo Falcón (1984), Louise Doyon (2006), Hiroshi Matsushita (1983), Daniel James (1990/2005), Álvaro Abós (1989), Jean Bunel (1992), Juan Carlos Torre (1988/1976/1989/1995), Gino Germani, Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero (1972), entre otros.

Desarrollo del trabajo

Desde una perspectiva metodológica cualitativa intentaremos reconstruir la complejidad del vínculo Néstor Kirchner – Hugo Moyano. Se trabajará en la recolección de información por medio de la observación de fuentes periodísticas, principalmente la prensa escrita de alcance nacional como *Página12* y *La Nación*. Entendemos que el recorrido periodístico, a la luz de las perspectivas teóricas que

nos acompañan durante el desarrollo de la investigación, nos permitirá identificar y analizar acontecimientos fundamentales en la relación entre ambos actores.

El soporte de material histórico de los gobiernos precedentes y el análisis de los acontecimientos del periodo en cuestión posibilitan la diferenciación de dos momentos en la construcción de poder y liderazgo presidencial y el papel jugado por Moyano como factor clave en la conformación del mismo.

Un primer momento se caracteriza por el cambio de paradigma político que se fundamenta en la aparición de un gobierno que hace de la opinión pública la base de su estrategia política (Cheresky, 2008) y rompe con la concepción neoliberal de los gobiernos anteriores de Carlos Menem y Fernando de la Rúa. La estrategia de construcción de poder de Kirchner se fundamenta en la necesidad urgente de lograr legitimidad y respaldo, tanto popular como legislativo. Durante esta primera etapa predomina la estrategia de construcción de consenso político y social, el llamado a la pluralidad y el acuerdo entre diferentes banderas políticas. Nombramos a este primer periodo: *la transversalidad*.

Mientras que un segundo momento podría describirse como *la re-composición del conflicto* basada en la decisión de Kirchner de abrir el espacio político para la disputa sindical y salarial y de reintroducir al sindicato como actor clave en la puesta en juego de diferentes estrategias de consolidación de poder y espacios de liderazgo.

I. La Transversalidad

1. Crisis de representación y elección presidencial

Por *crisis de representación* entendemos el debilitamiento en la credibilidad de los partidos políticos, el Congreso y la institución pública en general, seguido del deterioro institucional en la capacidad de generar poder político y consenso social. El surgimiento de nuevos actores en la arena política –medios de comunicación, lobbies empresarios, organizaciones de protesta social, etc.- con amplia capacidad de movilización marginan aún más los lazos tradicionales de representación, modificando la relación entre representantes y representados, generando “desencanto político” en amplios sectores de la sociedad (Novaro, 2000).

La asunción de Néstor Kirchner en 2003 se desenvuelve en un contexto de desencanto político, en un contexto de excepcionalidad según Cheresky (2008). El llamado a elección y traspaso de mandato se producen de manera anticipada frente a la crisis de representación política y la pérdida de legitimidad del presidente interino Eduardo Duhalde.

Tras la crisis de diciembre de 2001 y la renuncia de Fernando de la Rúa, se había logrado reestablecer cierta gobernabilidad bajo estrictos parámetros institucionales en el proceso de sucesión del presidente saliente. La transferencia del mando estuvo a cargo del presidente provisional del Senado, Ramón Puerta, quien asumió el cargo vacante del vice-presidente Carlos “Chacho” Álvarez². Ante la renuncia de De la Rúa, en medio del caos social de saqueos y muertes, Puerta asumió la presidencia por tres días y llamó a una Asamblea Legislativa. La Asamblea, con mayoría de legisladores pertenecientes al Partido Justicialista, eligió al gobernador de la provincia de San Luis, Rodríguez Saá como Presidente Provisional. Sin embargo, la crisis por la ausencia de liderazgo al interior del peronismo no tardó

² El vice-presidente de la coalición de gobierno de la Alianza, Carlos “Chacho” Álvarez, renuncia a su cargo en el mes de octubre de 2000 en medio de denuncias por corrupción en la administración y sobornos en el Senado para la aprobación de la ley de reforma laboral. El escándalo que motivó la salida del vice-presidente, dio comienzo a la cadena de acontecimientos que fueron minando la imagen presidencial de Fernando de la Rúa.

en hacerse sentir. El apoyo de los gobernadores justicialistas hizo agua ante la sospecha de las intenciones del mandatario interino de permanecer en la Presidencia. Rodríguez Saá renunció luego de siete días y de declarar la suspensión del pago de la deuda externa. La tutela del cargo recayó sobre Eduardo Camaño - presidente de la Cámara de Diputados- quien convocó a Asamblea Legislativa para el 1° de enero de 2002, cuando una coalición de peronistas y radicales designó presidente a Eduardo Duhalde con 262 votos a favor, 21 en contra y 18 abstenciones (Ollier, 2007).

Duhalde “asumió la declaración de cesación de pagos de la deuda pública (...), y declaró el fin de la convertibilidad, con lo que la moneda nacional se apreció, favoreciendo el renacimiento de la producción para el mercado interno y estimulando las exportaciones. Lo que el gobierno interino no pudo sobrellevar fue la desconfianza ciudadana hacia el poder y hacia los líderes políticos en general” (Cheresky, 2004:7). El lazo de representación basado en el reconocimiento de la autoridad del representante por los representados (Novaro, 2000), se vio abatido por la ira social tras los sucesos de Avellaneda³ a mediados del mismo año. La represión violenta a la protesta social resultó en la desestabilización institucional causada por la pérdida de legitimidad de Duhalde y la alta tensión social. El llamado a elecciones anticipado para el mes de abril y la transferencia de poder en mayo de 2003⁴ fue ineludible.

El contexto socio-político y económico no puede ser caracterizado sino como excepcional. El escepticismo y la volatilidad de la intención de voto copaban el escenario electoral al tiempo que la crisis de representación se hacía visible en los partidos tradicionales. El fraccionamiento y la pelea se dieron fundamentalmente en el Partido Justicialista (PJ). La puja interna por la designación del candidato oficial del peronismo cristalizó la disputa entre el ex presidente Carlos Menem y Eduardo Duhalde. La distancia entre ambos fue de tal magnitud que se estuvo al borde de la

³ El 26 de junio de 2002 distintas organizaciones sociales llevaron adelante una movilización y corte de accesos a la Capital Federal. El PE dio la orden de desalojar la protesta piquetera, la cual se produjo de manera violenta por la policía causando dos víctimas fatales, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. La reacción social fue tal que el presidente en ejercicio, Duhalde, decidió acortar su mandato en casi siete meses.

⁴ El llamado a elecciones presidenciales estaba programado originalmente para el día 27 de octubre de 2003 y el consiguiente traspaso de mando para el 10 de diciembre.

ruptura partidaria. Sin embargo, la resolución para preservar el voto peronista fue suspender la elección interna y dar la batalla del PJ en la elección general. Competieron por el peronismo: Carlos Menem, Néstor Kirchner y Adolfo Rodríguez Saá, aunque sin contar con el aval oficial del partido. De modo que "Duhalde ubicó a su propio candidato (Kirchner), satisfizo las expectativas de las diferentes facciones subnacionales y evitó que Menem fuera el único postulante justicialista". (Ollier, 2007:86)

Por parte del radicalismo, se llevó adelante la elección interna del candidato oficial, en medio de un escándalo por fraude en el escrutinio y la necesidad de intervención judicial para dirimir el conflicto. Entre tanto, los exponentes principales, Elisa Carrió y Ricardo López Murphy, ya habían decidido presidir su propia candidatura.

La elección presidencial se llevó adelante el 27 de abril de 2003 en medio de un clima de alta desconfianza por parte de la ciudadanía. Al tiempo que, el fraccionamiento de los partidos provocaba una situación inédita hasta el momento, en caso de que ninguno de los competidores alcanzara el 45% del sufragio a favor, sería necesario recurrir al procedimiento de *ballotage*⁵ -o segunda vuelta electoral- para definir al ganador.

La elección no logró definir un liderazgo evidente, entre los dos primeros candidatos no alcanzaban a superar el 46% del voto positivo. Menem fue el candidato más votado en la primera vuelta, obteniendo el 24,45% de los votos. Néstor Kirchner, gobernador de Santa Cruz elegido como favorito por Duhalde, consiguió el 22,24% de los sufragios. El resto de los candidatos tampoco alcanzó una buena adhesión: en tercer lugar fue para Ricardo López Murphy con el 16,79%; seguido de Rodríguez Saá que obtuvo el 14,11% y finalmente Elisa Carrió con una aceptación del 14,05%.

La segunda vuelta electoral estaba prevista y el cuadro político manifestaba su expreso rechazo a Carlos Menem. Amplios sectores de la población consideraba a

⁵ Para que un presidente sea electo en primera vuelta, la Constitución Nacional exige un umbral mínimo del 40% del sufragio para la fórmula más votada, y una diferencia del 10% con la segunda. En caso que ambas partes superen el 40 %, la primera opción tiene que lograr el 45 por ciento de los sufragios.

Menem como el responsable de la crisis económica y social que azotó al país en 2001. La ola antimennemista “anunciaba el triunfo de un voto negativo arrasador que favorecería al otro candidato en la lista, Néstor Kirchner” (Cheresky, 2008:49). Menem, responsabilizó a la Alianza y al interregno duhaldista de difamar su imagen y decidió retirarse de la contienda a fin de evitar una derrota abrumadora. Kirchner calificó la salida como cobarde: “Las encuestas que unánimemente le auguran una derrota sin precedentes en la historia electoral de la república permitirán que los argentinos conozcan su último rostro: el de la cobardía. Y sufran su último gesto: el de la huida” (Néstor Kirchner en Infobae, 14/05/2013).

Néstor Kirchner resultaba entonces electo con el 22% del sufragio nacional.

2. El inesperado presidente Kirchner

Al momento de su renuncia a la segunda vuelta electoral, Carlos Menem expresaba: “Que se quede él con el 22% de los votos, yo me quedo con el pueblo” (Página 12,14/05/2003) en alusión a Kirchner. Los analistas a cargo de relatar el momento político pronosticaban que la legitimidad del nuevo presidente “sería débil y dependería de la estructura peronista, sobre todo de la provincia de Buenos Aires” (Cheresky, 2008:49). Y es cierto, sin el apoyo del aparato partidario y clientelar bonaerense Kirchner no habría podido alcanzar el tímido 22%.

Néstor Kirchner, gobernador de la provincia de Santa Cruz y presidente del PJ santacruceño desembarcaba a nivel nacional de la mano del presidente interino, Eduardo Duhalde. Los condicionamientos no se hicieron esperar y resultaba urgente por un lado, llevar de vice-presidente a Daniel Scioli –aunque proveniente de la década de 1990, resultaba un personaje atractivo para las clases medias-. Por otro lado, mantener el gabinete constituido por Duhalde que había logrado demostrar cierto reconocimiento y popularidad, principalmente el ministro de Economía Roberto Lavagna. De ese modo se garantizaba cierta “gobernabilidad económica que atemperaba la tonalidad «nacional y popular» del discurso de campaña de Kirchner” (Cheresky, 2004:8). Factores que sumados al apoyo oficial y al aparato peronista de la provincia de Buenos Aires lograron llevar a Kirchner a la presidencia con el 22%

del sufragio y con un ballottage que no fue. La ausencia de liderazgo era la clave para comprender la lógica que desarrolló el peronismo durante el periodo de transición desde el fin del menemismo hasta la consolidación de Kirchner. (Ollier, 2007)

En palabras de Cheresky (2008:49): "Kirchner llegaba así a la presidencia por un concurso de circunstancias fortuitas y era portador más de un voto rechazo que de una promesa avalada. En ese sentido, Kirchner resultó ser un presidente accidental, surgido de circunstancias muy diferentes a las que solían caracterizar la selección de liderazgos en las democracias institucionalizadas".

3. La reconstrucción del lazo

La protesta regular y el malestar de la ciudadanía aparecían "ante el gobierno y las instituciones como un factor permanente de interpelación a la legitimidad política (...) los lazos de representación estaban profundamente cuestionados" (Cheresky, 2002:2).

La crisis que atravesaba la sociedad argentina ponía en juego "la formación de una autoridad política legítima, que si bien está sostenida en las reglas democráticas, no contiene sólo el poder que le confieran los ciudadanos, ni consiste en la mera aplicación de leyes. Requiere, por lo tanto, como una condición intrínseca de su funcionamiento, de decisiones de los representantes y de actos de identificación y reconocimiento de los representados, o sea, de la intervención personal de los actores políticos" (Novaro, 2000:11). Ciertos análisis de coyuntura apuntaban a la necesidad de "convivencia y disidencia, diferencia y tolerancia en el marco de un diálogo cotidiano. Una de las causas por las que implosionó la política argentina de los últimos años fue la ausencia constante e inexplicable de un trato habitual entre políticos diferentes" (Morales Solá en La Nación, 26/05/2003). La exigencia ciudadana de respeto a la institucionalidad resultaba ineludible, "la crisis expresaba también un fuerte llamado al orden y al retorno a la normalidad, frente al quiebre de las instituciones básicas y la amenaza de disolución social" (Svampa, 2007:41).

El esfuerzo presidencial se enfocó así en la reconstrucción política del juego legislativo como fundamento para la reconstrucción del lazo de representación y el buen funcionamiento institucional. En el discurso de asunción presidencial Kirchner declaraba: "Cambiar importa aprovechar las diversidades sin anularlas. Se necesitará mucho trabajo y esfuerzo plural, diverso y transversal a los alineamientos partidarios. Hay que reconciliar a la política, a las instituciones y al gobierno, con la sociedad". (Kirchner, 25/05/2003)

Se instaba al compromiso de trabajar en conjunto desde las diferentes fuerzas políticas de modo transversal, respetando los distintos posicionamientos en la búsqueda de objetivos comunes. La convocatoria a participar del nuevo espacio político fue amplia, involucrando a referentes políticos del radicalismo, socialismo y de la Afirmación para una República Igualitaria -ARI-. La convocatoria también se extendía de modo explícito a los sectores sindicales y las organizaciones sociales de protesta –nuevo actor político que utiliza el piquete y la ocupación del espacio público como principal herramienta de manifestación y demandas sociales-.

Desde un principio el cambio de paradigma en el sistema político sobresale, basado en la aparición de un gobierno que hace de la opinión pública la base de su estrategia política (Cheresky, 2008).

4. La re-configuración del espacio político

Parte de la reconstrucción del consenso social y político fue la decisión presidencial de optar "por un estilo que tendió a dividir dicotómicamente el espacio social" (Iglesias, 2011:134). Con el objetivo de lograr la reconstrucción de la confianza ciudadana y de aumentar los niveles de legitimidad, resultaba urgente destacar los lineamientos del proyecto que se presentaba. Resultaba necesario diferenciarse del gobierno anterior de Carlos Menem y por tanto re-configurar el campo de acción política en base a la división entre amigos y enemigos. (Laclau, 1996) Kirchner supo interpretar el humor social e identificar la serie de enemigos en

la hora para la sociedad argentina. La lectura de "*que se vayan todos*"⁶ como marca indeleble de la crisis de 2001, no hizo más que acentuar la necesidad de reparar el pasado de un Estado *entreguista*⁷ y de re-definir el escenario político y social. La consigna expresaba la voluntad de la ciudadanía de "librarse de toda una dirigencia que había perdido toda legitimidad". (Campione; Rajland, 2006:301)

Al poco tiempo de la asunción del Poder Ejecutivo la acción de gobierno resultaba vertiginosa por la efectividad de las decisiones y una voluntad política que demostraba un pronunciado cambio de paradigma en el quehacer de la cosa pública. "Es el Estado el que debe actuar como el gran reparador de las desigualdades sociales en un trabajo permanente de inclusión y creando oportunidades (...) Es el Estado el que debe viabilizar los derechos constitucionales, protegiendo a los sectores más vulnerables de la sociedad (...)" (Kirchner, 25/05/2003). El posicionamiento era claro: resarcir el quiebre que el terrorismo de Estado y el perjuicio económico habían ocasionado a la sociedad toda. Casos ejemplares, como menciona Iglesias (2013) fue el cambio de posición del Estado frente a los Derechos Humanos y por consiguiente respecto a las Fuerzas Armadas y los militares en general. Así también llevó adelante un saneamiento institucional, el cuestionamiento de una Corte Suprema con *mayoría automática* y la injerencia en la soberanía del Estado argentino por parte del Fondo Monetario Internacional y las empresas transnacionales. Casos que, con el correr del tiempo han explicitado una forma de construcción política que no fue ni transitoria ni coyuntural y que se ha convertido en identidad del *kirchnerismo*⁸.

⁶ La consigna "*que se vayan todos*" fue la bandera del pueblo argentino que manifestó su bronca el 20 de diciembre de 2001 generando la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. El descontrol social y la protesta generalizada marco el punto de quiebre de la crisis institucional que atravesaba el poder político asediado por la corrupción, el enriquecimiento ilícito y el abuso de privilegios.

⁷ Nos referimos al estado de situación que comenzó con la dictadura en 1976 y se prolongó durante los dos gobiernos de Menem respecto a la apertura total de la economía argentina al mercado financiero internacional. Así mismo, nos referimos a la permisibilidad de parte del gobierno argentino ante la injerencia de los organismos internacionales de crédito en los asuntos internos del Estado.

⁸ Fenómeno que tiene que ver con la aparición de un nuevo sujeto político en escena, irrumpe en 2003, sorprende y construye su relato en base a la recuperación de la acción militante basada en la retórica de lo nacional y popular, la memoria de Estado frente a las atrocidades de la violencia de la última dictadura militar (1976-1983), la defensa de la soberanía política y económica del Estado nacional. Es un sujeto nuevo, de herencia peronista pero que se para de la vereda de enfrente al peronismo de la década del 90 (presidencia de Carlos Menem). Es acción, transformadora y contestataria, es construcción identitaria a partir de un Otro. Se constituye desde esa otra identidad que se le contrapone. Es antagonismo, es posicionamiento de la estrategia

La espectacularidad de las decisiones que transgredían acuerdos corporativos y pactos implícitos apelaba "(...) a la bendición de la opinión pública para lograr la legitimidad que le negaron las urnas. Sus movimientos a favor de los derechos humanos, la renovación de la Corte (nombrando jueces honorables), su confrontación discursiva con la vieja corporación política, su intento de conformar una coalición que incluyera a dirigentes políticos no peronistas, las exitosas negociaciones con el FMI llevadas adelante por su ministro de Economía, Roberto Lavagna (...) y su esfuerzo por ubicar el gobierno en el espectro de centro izquierda -señalando como su gran adversario a la década de 1990 encabezada por Menem- constituyeron recursos subjetivos, a los que sumó el mejor impacto del factor externo, que le permitieron convertirse en poco tiempo en un presidente popular" (Ollier, 2007:87).

La crisis de representación política y la expansión del espacio público dieron lugar a la emergencia de este nuevo tipo de liderazgo y a la consolidación de nuevos vínculos de representación. Como hemos mencionado más arriba Cheresky lo denomina *liderazgo de popularidad* cuyas principales características se basan en el estilo personal, mediático y en la capacidad de establecer vínculos directos e inmediatos con la ciudadanía (vínculos que al mismo tiempo resultan efímeros e inestables). Es también el actor político más apropiado para llevar adelante la redefinición de los campos de pertenencia e influencia, concitar adhesiones y generar redefiniciones en el campo político en general. "Los líderes de popularidad tienen, entonces, más libertad, en la medida en que no están restringidos por compromisos corporativos o por el control de instancias dirigentes, a las que tengan que dar cuenta de sus actos. Tienen capacidad para instituir o redefinir la identidad política que pretenden liderar. No obstante, y por la misma razón, aun siendo

presidencial en función de la identificación clara de fronteras y adversarios políticos. No reconoce la posición neutral del Estado frente a las cuestiones que le son propias y no duda en desafiar a los grandes poderes nacionales e internacionales. Es peronista pero no se queda a merced de la maquinaria del PJ, sale por fuera y llama a la construcción conjunta desde distintos sectores (aquí sólo tomamos en cuenta el período de estudio en la presente investigación: 2003/2007). Ha sido considerado un presidente accidental que supo leer la crisis de legitimidad en la que se encontraba el país en 2003 y construir una nueva identidad desde el imaginario de la generación del setenta que se mantiene como un continuo impreciso, indefinido y difuso. "El Kirchnerismo es una construcción política muy fuerte, que abreva fundamentalmente en el peronismo, pero que también incorpora a sectores que no lo son, ni lo van a ser, pero se sienten identificados con un modelo y una cosmovisión del país" (Cristina Fernández de Kirchner, 7/10/2013).

exitosos, no disponen de un capital político seguro. El lazo de representación es contingente y se halla sometido a una permanente recreación” (Cheresky, 2008:37).

La transversalidad llegó para darle aires nuevos a un sistema político en estado terminal luego del “*que se vayan todos*” de diciembre de 2001. La intención de reagrupar a todo el progresismo diseminado en partidos y movimientos sociales bajo una misma bandera alcanzó su objetivo de generar tiempo. Tiempo político en el cual Kirchner demostró capacidad para instituir y redefinir el espacio político en general. Durante este primer periodo⁹ logró consolidar su base de poder y legitimidad en base a la relación directa con la ciudadanía y en los altos índices de aceptación pública, desligarse del peso de la figura de Duhalde¹⁰ y entablar renovados vínculos con el sector sindical. Esta última cuestión no sólo le permitió reabrir el espacio del conflicto gremial a fin de garantizar apoyo para el desarrollo de un nuevo modelo productivo y salarial, sino que también le proporcionó el medio estratégico para canalizar el conflicto en el espacio público.

5. Acercamiento de dirigentes sindicales y organizaciones piqueteras

El gobierno de Kirchner marca el inicio de un nuevo capítulo para el sindicalismo. La reapertura del espacio para el conflicto gremial y salarial da pie a la recuperación del rol del sindicato como interlocutor privilegiado y aliado estratégico del gobierno. En principio el esfuerzo se dirigió al arco sindical en general, tanto a la CGT de Moyano como hacia la Central de los Trabajadores Argentinos –CTA dirigida por Víctor De Gennaro-.

En el año 2003 el mapa gremial se encontraba configurado por tres centrales sindicales. Por un lado, la CGT oficial a cargo de Rodolfo Daer, reconocida durante el

⁹ Vale recordar que la presente investigación se encuentra dentro de los estudios en base a factores sociales y políticos y por tanto, la periodización realizada solo se atiene a los objetivos analíticos de la misma. Los momentos identificados en la construcción de liderazgo del presidente Kirchner son la resultante de la construcción de dos momentos políticos que no son exclusivos ni lineales.

¹⁰ La distancia que existía entre Kirchner y Duhalde terminó de plasmarse en la coyuntura electoral de 2005 (Cristina Fernández de Kirchner e Hilda Chiche Duhalde competieron por el puesto de senador por la provincia de Buenos Aires) y tuvo como resultado la ruptura del PJ. La división en el Partido Justicialista se concreta, primero en la Provincia de Buenos Aires y, luego, en distintos territorios provinciales. La dirigencia peronista decidió alinearse detrás del presidente reconfigurando la base de poder del PJ, lo cual le permitió a Kirchner desligarse completamente del poder duhaldista.

gobierno de Menem como la única entidad con personería gremial autorizada a ejercer la representación de los trabajadores. Nucleaba a “los Gordos”: Oscar Lescano de Luz y Fuerza, Armando Cavalieri del sindicato de Comercio, West Ocampo de Sanidad, los gastronómicos de Luis Barrionuevo; gremios mayoritarios cooptados durante el menemismo a formar parte del bloque de poder, convertidos en sindicatos-empresas a cambio de la adhesión a la desestructuración del Estado y la flexibilización del mercado de trabajo.

Por otro lado, en el año 2000 el ala disidente de la CGT, comandada por Hugo Moyano del Movimiento de los Trabajadores Argentinos -MTA-, se separa totalmente de la central y emprende una dura campaña de oposición a la política económica y laboral del gobierno de De la Rúa. El MTA se conformó en 1991 con los gremios liderados por transporte -camioneros y colectiveros- que no acompañaron el reconocimiento de la CGT oficial. La decisión fue agruparse en una tendencia de oposición interna que no respondía a la conducción oficial de la CGT pero cuyo objetivo era dar la pelea por dentro y alcanzar la conducción. Asumió el principio de unidad y fortaleza de los trabajadores bajo una sola Central, tomando distancia de cualquier posibilidad de ruptura, “la concepción por la cual golpear a la conducción vigente por entreguista y contraria a los intereses de los trabajadores no significaba golpear sobre el modelo sindical construido a partir de 1945” (Merino, 2011:90). La estrategia del ala disidente consistió en alternar medidas de presión y negociación sin romper el vínculo con el gobierno de Menem ni con la CGT. Su capacidad de movilización fue demostrada en sucesivas oportunidades¹¹ junto con nuevos actores opositores más combativos como la CTA y la Corriente Clasista y Combativa -CCC-. La decisión del MTA de dar la pelea al interior de la CGT culminó en marzo de 2000 con la ruptura de la Central a causa de la nueva ley de reforma laboral (conocida como ley Banelco). La misma propiciaba un período de prueba y el despido de trabajadores sin preaviso ni pago de indemnización mediante, al tiempo que promovía la preeminencia del convenio laboral por empresa por sobre el convenio sindical. (La Nación, 15/12/2003) Moyano se ubicó en contra de la nueva disposición

¹¹ El MTA de Moyano, la CTA de De Gennaro y la CCC de Santillán conformaron la Mesa de Enlace Sindical en 1994 a fin de llevar Adelante la Marcha Federal, acompañada de movilizaciones y paros nacionales en repudio de la política económica de Cavallo.

avalada por el sector dialoguista de los Gordos llevando a la fractura de la CGT. Durante la campaña presidencial de 2003 aportó su apoyo a la candidatura de Kirchner frente al posible regreso de Menem en la segunda vuelta electoral.

Finalmente, en un tercer lugar, se encontraba la CTA conformada en 1992 principalmente por sectores estatales como los docentes de CTERA y la Asociación de Trabajadores del Estado -ATE-. La CTA optó desde un principio por desligarse de la CGT poniendo en "evidencia como agotada la vía de una renovación desde adentro del peronismo y de la estructura sindical tradicional y apostó a la opción de una construcción política alternativa que hiciera suyos los principios de la autonomía, la democracia sindical y la ética gremial" (Benetti, 2012:138). Su surgimiento marcó el origen de la discusión del modelo sindical argentino y la emergencia de nuevos actores con capacidad de representación y defensa de los derechos de los trabajadores. Durante la década del 90 manifestó la más férrea oposición a las políticas de modernización del Estado y flexibilización del mercado laboral, "incluyendo la categoría de trabajadores desocupados, modalidades de trabajo informal, y la problemática territorial (...), pero que se desdibujó al no jugar un papel preponderante en las jornadas del 19 y 20 de diciembre (de 2001) ni después de ellas" (Campione; Rajland, 2006:307). Decidió no participar ni avalar a ninguno de los candidatos a presidente en la elección de abril de 2003.

Los grandes sindicatos optaron por la supervivencia de la organización al ritmo de las exigencias del proceso de modernización neoliberal, permitiendo luego la reaparición del sindicato como actor clave para el proyecto económico de Kirchner (Murillo 2013). El gobierno de Kirchner "necesitaba el apoyo de los sindicatos capaces de proveer cierta moderación salarial, frente a la reanudación de las negociaciones colectivas, y control de los niveles de protesta" (Benes, Fernández Milmanda, 2012:55).

Los niveles de protesta en base a nuevas formas de organización y ocupación del espacio público se habían favorecido por la transformación en la estructura social y el espacio vacante en la disputa política por parte de los sindicatos. Lo que se produjo durante el gobierno de Carlos Menem fue que "lejos de operar un efecto despolitizador se constituyeron nuevas identidades políticas provenientes del

heterogéneo campo social y, también, del partidario” (Iglesias, 2013:8). Los nuevos agentes de acción política que se presentan en el espacio público surgen de diferentes tradiciones de lucha popular, tanto del sindicalismo como de partidos políticos de izquierda.

A partir de mayo de 2003, la estrategia del gobierno estuvo basada en establecer un amplio diálogo con los distintos sectores del sindicalismo, valiéndose de la carencia de vínculos orgánicos con sector alguno. “Durante todo el 2003 persistió desde el gobierno un reconocimiento pasivo en cuanto a los directivos de la CGT oficial, y aunque se valoraba su existencia, no eran considerados como los interlocutores políticos preferidos del Presidente dentro del sindicalismo (...) En cuanto a los representantes de la CGT disidente encabezada por Hugo Moyano, originalmente su entendimiento no llegó a ser abiertamente preferente, aunque sí lo suficientemente claro como para enviar la señal al mundo sindical agrupado dentro de la CGT de la discusión en torno a la necesidad de unificar estas fuerzas sindicales (...) Inicialmente el gobierno llevó adelante un reconocimiento preferencial de la CTA como interlocutor sindical en varios planos (...)” (Soca, 2011:37).

También se fomentó la creación de vínculos con diversas organizaciones sociales, incluyendo, en especial, a las agrupaciones piqueteras más vinculadas ideológicamente al peronismo o a la convicción nacional-popular en general. Se proyectó sobre las organizaciones piqueteras la incorporación del conjunto de demandas sociales al sistema, sirviéndose principalmente del llamado al diálogo y el lanzamiento de una serie de programas de desarrollo social. El propósito era doble: intentar contener el conflicto social y, de ese modo, recuperar el control del espacio público a fin de anular o suprimir el conflicto y desplazar el discurso opositor hacia esferas no estratégicas dentro de la sociedad (Groppo, 2009). Puso en acto “simultáneamente, el abanico de estrategias disponibles para integrar, cooptar y disciplinar a las organizaciones piqueteras opositoras” (Svampa, 2007:46). Medidas gubernamentales que le permitieron generar aliados dentro del sector piquetero y la inclusión de los mismos en proyectos políticos tendientes a ampliar las bases de sustentación de poder presidencial. El gobierno Kirchner “se mostró decidido a construir alianzas con parte de los nuevos actores, a condición de que moderaran la

modalidad y frecuencia de sus protestas, y asumieran un grado de compromiso con la gestión pública” (Campione; Rajland, 2006:303).

II. La re-composición del conflicto

De modo inverso a la retirada del Estado como articulador de las fuerzas sociales durante el gobierno de Menem, en el año 2003 se da paso al comienzo de un nuevo gobierno que explícitamente buscó el apoyo de las organizaciones sindicales (Etchemendy, Collier, 2008). Kirchner decidió volver sobre la política laboral y recomponer el espacio para el conflicto salarial, ubicando las demandas e intereses de los trabajadores como demandas e intereses del Estado nacional. Con un nivel de desocupación de dos dígitos¹², el Poder Ejecutivo reanudó las bases del modelo nacional y popular y reabrió el espacio institucional y simbólico a la lucha de los trabajadores: “El gobierno nacional no va a ser neutro, no va a mirar desde la tribuna este partido” -advirtió Kirchner, respecto a la posición del Estado en las discusiones salariales- (La Nación, 04/12/2004).

La estrategia económica y social fue clara desde un principio: retomar los principios de la política nacional y popular que propiciaba el primer peronismo¹³: contención del mercado interno y aumento del gasto público, renegociación de la deuda externa y promoción del empleo. El objetivo primero radicó en la recuperación de la gobernabilidad y la estabilidad económica. El aliado estratégico que re- aparece y reclama espacio: el sindicato.

¹² Durante la crisis de 2001 el nivel de desempleo alcanzó un punto máximo del 21,5% y el 17% cuando Kirchner asumió la presidencia. En 2007 la desocupación se encontraba en un 8,5 por ciento (Rial, 2009).

¹³ Llamamos primer peronismo al primer período de gobierno de Perón. El Gral. Juan Domingo Perón fue el fundador del Partido Justicialista y presidente durante tres períodos. Dos gobiernos consecutivos entre 1945 y 1955 considerados como la etapa de oro del peronismo y de mayor ascendencia en la estructura social por parte de los sectores asalariados, período basado en el reconocimiento y la organización de los trabajadores bajo el rol regulador del Estado. En esta etapa se llevó adelante un proceso de institucionalización de las organizaciones sindicales y conquista de derechos sociales. El poder del gobierno peronista basado en el mercado interno y el movimiento obrero culminó con el derrocamiento militar de 1955. Perón obtuvo un tercer mandato como presidente en 1973 tras 18 años de exilio.

1. La institucionalización de la acción sindical

El papel de los sindicatos en la política argentina se fundamenta en el acuerdo institucional¹⁴ sindical que se originó durante el primer gobierno de Perón¹⁵ y que ha regido el sistema de relaciones laborales¹⁶ desde entonces. A pesar de que el rol del sindicato como actor político se encontraba prácticamente desarticulado en 2003.

Acuerdo¹⁷ entre el Estado y las organizaciones de trabajadores que se formaliza a través de la ley de Asociaciones Profesionales y otorga a los sindicatos la base de su poder a partir del concepto de la personería gremial. Se entiende por tal la capacidad que posee una organización sindical de representar los intereses colectivos de una rama de actividad. Dicha capacidad es discernida por el Estado que, en cada caso, determina la representación a partir del criterio del número. Una

¹⁴ Llamamos arreglo institucional a normas y procedimientos establecidos entre dos o más actores, y que forjan entre ellos y su entorno conjuntos de expectativas y de intereses estables. Quienes participan del acuerdo o buscan participar en él, desarrollan habilidades y estrategias, al tiempo que se nuclean en organizaciones según las reglas del juego vigentes. Todo ello hace que desarrollen diferentes poderes para los cuales necesiten defender y preservar los acuerdos existentes (Levitsky, 2004).

¹⁵ Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, comienza a partir de 1943 a gestar un nuevo modo de hacer política y de relaciones con los distintos sectores. Perón ofrece desde un principio espacio a los trabajadores que acuden a verlo, y desde la Secretaría se impulsa la asociación de los trabajadores y la lucha conjunta por las conquistas laborales. La nueva política social se pone en marcha, con asistencia y aporte de los referentes sindicales, entre junio y noviembre de 1944. El espectro completo en materia laboral podía ser cubierto por la Secretaría de Trabajo y Previsión en función de las prerrogativas otorgadas a Perón, reformas generales en relación a ciertas actividades o servicios sociales, mejoras salariales, arbitraje en conflictos profesionales, condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, etc. Las reformas introducidas desde la Secretaría de Trabajo “representaron una revolución fundamental en el manejo de la economía y de la sociedad, (...) una transformación profunda de la condición social de la clase obrera argentina. Antes de 1943, la clase obrera había sido explotada económicamente, estaba mal organizada y socialmente desdeñada. Después de 1943, la situación de la clase obrera en su conjunto experimenta un gran cambio. Gracias a los esfuerzos de la Secretaría se aumentaron los sueldos, creció el nivel de vida y se mejoraron las pautas de organización” (Little, 1988). Perón inscribe a la clase trabajadora en un nuevo rol, basado en un tipo de ciudadanía de carácter social. Cuestionaba de este modo la previa cosmovisión de la sociedad liberal del periodo oligárquico la cual pregonaba la separación entre el Estado y la sociedad civil, y el carácter de ciudadano según los derechos cívicos individuales.

¹⁶ Las relaciones laborales consideradas en un sentido amplio se refieren a las formas y mecanismos de interrelación de los actores (empresas, sindicatos, trabajadores y Estado) en el marco de la organización de la producción, tendientes a adoptar decisiones en torno a la ejecución del trabajo y a la distribución de resultados. Comprenden elementos institucionalizados (política laboral y salarial, contratación colectiva, convenios particulares, reglamentos internos, etc.) como elementos de diversa naturaleza (prácticas, costumbres, aspiraciones, prejuicios, motivaciones de los actores, entre otros). Para mayor información consultar: Benetti (2012).

¹⁷ El reconocimiento institucional se basa desde entonces en tres herramientas clave: la ley de Asociaciones Profesionales, la ley 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo y la ley de Obras Sociales de 1971. La ley 18.610 de Obras Sociales fue sancionada durante la dictadura militar del Estado Burocrático Autoritario como modo de calmar la agitación social luego de la sucesión del *Cordobazo*. Este acuerdo entre el mando militar en gestión y las organizaciones sindicales otorgaron poder económico al poder político que las mismas ya detentaban, así como el modo de accionar sindical conocido como “sindicalismo de servicios”.

vez que un sindicato ha sido dotado con la personería gremial, el Estado sigue actuando sobre él, precisando el ámbito de representación personal y territorial (Abós, 1989). La sujeción del poder sindical al control del Estado se encuentra más aún desde el diseño de la legislación del mismo. "En el diseño de la ley, que indudablemente favoreció su expansión, estuvo inscripta la voluntad de controlarlo. La institución del monopolio sindical, por la cual el Estado otorga al sindicato la personería gremial y, a través de ella, la facultad de representar con exclusividad a un conjunto de trabajadores, de negociar en su nombre y de retener obligatoriamente un monto de sus haberes en pago de sus servicios, reserva en forma simultánea y en mérito a ese mismo acto a la burocracia pública el derecho de controlar al sindicato en el desempeño de sus funciones gremiales, su vida pública interna y el uso de sus fondos" (Torre, 1989:17).

Del mismo modo, el sistema de relaciones laborales quedaba regulado por la ley de acuerdo colectivo de trabajo de 1953. "El convenio colectivo pasa a ser de aplicación *erga omnes*, para todos los trabajadores de un colectivo determinado, estén los mismos adheridos o no al sindicato firmante. Lo mismo para los empleadores, el convenio los obliga, pertenezcan o no a la entidad empresaria suscriptora. Las cláusulas de los convenios colectivos son irrenunciables e inderogables por contratos particulares. Nadie puede trabajar en condiciones inferiores a las que establece el convenio colectivo, so pena de resultar nulo ese pacto individual" (Benetti, 2012:39).

Dicho arreglo institucional logro configurar "un modelo sindical fuertemente centralizado, con un alto grado de injerencia estatal y con una gran concentración de poder económico y social en la cúpula gremial (...). La *Resistencia* primero y el *Vandorismo* después constituyen dos tipos de respuesta del sindicalismo peronista frente al mismo desafío: cómo preservar los derechos conquistados y el poder de las organizaciones sin el amparo de Perón" (Benetti, 2012:43/46). El poder de las organizaciones supo mantenerse en pie a pesar de los intentos de desactivación y *desaparición* por parte de los gobiernos civiles y militares que se sucedieron desde

1955¹⁸. Sería la reforma de Estado implementada durante el gobierno de Carlos Menem la que asumiría la tarea de redefinir el nuevo espacio para los sindicatos e iniciar un proceso de desindicalización (Iglesias, 2011).

El crecimiento económico y la modernización del Estado llevada adelante durante la primera parte de la década de los 90 no dieron como resultado mayor desarrollo e integración social. Sino, por el contrario, el salto en los índices de desocupación y pobreza fue proporcional a la concentración económica y regional. "A la exclusión correspondía también una gran transformación en el mundo del trabajo: la precariedad, la inestabilidad y desreglamentación resultante tanto de transformaciones productivas como de cambios jurídicos implicaron un debilitamiento de la protección tradicional de los trabajadores" (Cheresky, 2002).

Benetti (2012) sostiene que es posible reconocer elementos de ruptura y continuidad en la reforma del sistema de relaciones laborales. La variación se aprecia en "el conjunto de leyes modificatorias del contrato de trabajo, la transformación de algunos aspectos del régimen de obras sociales y el rediseño de la Seguridad Social". Mientras que se mantuvieron el acuerdo colectivo de trabajo -al menos formalmente en el nivel de rama- y el status de personería gremial como elementos garantes del verticalismo sindical e injerencia política de la cúpula organizacional. Siguiendo a la autora, la modificación de la reglamentación en materia laboral presenta dos aristas. Por un lado, el cambio jurídico introduciendo nuevas formas de contratación afectaban "la estabilidad, protecciones sociales y extensión de la jornada" (Benetti, 2012:88). Por otro lado, en lo que respecta a las Convenciones Colectivas de Trabajo, el Estado se situó del lado de las patronales propiciando la discusión salarial por establecimiento, dando paso a la individuación,

¹⁸ El régimen militar de 1976 introdujo modificaciones profundas en la estructura sindical. Intervino y canceló el funcionamiento legal de la CGT, encarceló y suprimió físicamente dirigentes sindicales, reprimió la protesta social de los obreros, suprimió comisiones internas y delegados de fábrica, introdujo una nueva legislación para regular los sindicatos, suspendió la negociación colectiva, intervino las obras sociales y legisló luego una nueva norma - que no llegó a ser reglamentada - que las independiza de la administración sindical (Palomino, 1986). Para mayor información sobre el período consultar: Doyon, 2006; Torre, 1989; Abós, 1983; James, 2005.

la diferenciación salarial y a la flexibilización¹⁹ del proceso de trabajo, desgastando el colectivo de solidaridad laboral.

Las principales transformaciones jurídicas fueron: el reemplazo de la ley de Contrato de Trabajo por la nueva ley de Empleo –leyes 24.013/91 y 25.013/98-, modificación de las leyes de Accidentes de Trabajo y de Convenciones Colectivas. Modificaciones que llevaron a la sustitución del concepto de *trabajo* –estabilidad; trabajo por tiempo indeterminado; salario, seguridad social y remuneración debida; etc.- por el de *empleo*, que admite una variedad de modalidades de contratación por plazos de tiempo determinado y flexibilidad del costo de despido para el empleador. Así también, la protección por accidentes de trabajo o enfermedad pasó a manos de las Administradoras de Riesgos de Trabajo –ART- y su resarcimiento por medio de litigación judicial al régimen de seguro.

Entre tanto, la réplica por parte de las organizaciones sindicales fue retribuida oportunamente. En el caso de la modificación de la ley de Trabajo, el gobierno de Menem decidió asumir la deuda de las obras sociales como deuda del Estado –ley 24.070/91- en reciprocidad por el acompañamiento sindical. Situación similar puede aducirse respecto de la reforma del sistema previsional: el gobierno buscaba centralizar la administración de las Cajas Jubilatorias a partir de la creación de un Sistema Nacional de Seguridad Social –ANSES-, proyecto no aceptado por la CGT y que abrió espacio a amenazas, presiones y negociaciones. El resultado del acuerdo Estado-cúpula sindical fue la privatización parcial del sistema por medio de la creación de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones -AFJP- y la participación de los sindicatos a través de la creación de fondos de pensiones sindicales.

El gobierno de Menem otorgó concesiones y garantías institucionales a ciertos sectores del sindicalismo tradicional con el propósito de mantener la gobernabilidad y la armonía social. Sin embargo, obtuvo respuestas disímiles por parte de las cúpulas gremiales. El posicionamiento de los referentes sindicales derivó en la fragmentación de la CGT en 1989 y en el surgimiento de nuevas agrupaciones de

¹⁹ Aceptación de condiciones de trabajo a consecuencia del aumento del desempleo y de procesos de racionalización de personal, como ser el retiro voluntario o las jubilaciones anticipadas.

trabajadores. La posición adoptada por el sindicalismo tradicional se sustentó en “una opción definida de la inscripción plena de la estructura sindical como pieza clave del transformismo argentino (...) trajo aparejada una modificación sustancial de su funcionamiento tradicional, incluso de aquella variante burocrática y negociadora” conocida como *vandorismo*. (Benetti, 2012:121)

Lo que sucedió durante el proceso de modernización económica fue la reconfiguración de las matrices sindicales, dado que sindicatos provenientes de las arcas más combativas del vandorismo peronista tradicional –como el caso del gremio de telefónicos, petroleros y mecánicos, UPCN, Obras Sanitarias, UOCRA- van a pasar a formar parte del nuevo *participacionismo*, al tiempo que integrantes de las filas dialoguistas de las décadas anteriores van a pararse en la vereda de enfrente a las reformas neoliberales.

Por parte de los sectores *dialoguistas*, se encontraba la facción que apoyaba al gobierno conocida como la CGT-San Martín, reconocida por el Estado en 1991 como única Central oficial. Este sector ofició como agente legitimador del discurso neoliberal acompañando las reformas de flexibilización laboral y la privatización de empresas estatales, asumiendo una postura similar a la complicidad. La participación fue tal que algunos sindicatos han participado incluso como administradores de las nuevas empresas públicas privatizadas. “En lugar de ser representantes de sus afiliados, los sindicatos se convirtieron en prestadores de servicios” (Santos, 2012:125). Posteriormente estos sectores “integrantes del nuevo bloque de poder” (Gómez, 2009:121), fueron desplazados de su lugar de preeminencia una vez realizada su tarea e instalado exitosamente el Plan de Convertibilidad²⁰. La reacción al *participacionismo* fue contundente. En septiembre de 1992 se produce el primer paro nacional convocado por la CGT y acompañado por todo el espectro sindical.

Por el lado de la *oposición* a la política menemista se encontraban los sindicatos agrupados bajo la conducción de Ubalдини en la CGT-Azopardo y que respondían a dos sectores diferenciados: sindicatos amenazados directamente por la política de

²⁰ El Plan de Convertibilidad de 1991 es una política de control de precios concretada por el Ministro de Economía Domingo Cavallo. Este plan buscaba la estabilidad económica a partir de una paridad 1 a 1 con la moneda norteamericana bajo la responsabilidad estatal de proveer la divisa, fomentando la sobrevaluación del peso argentino y el ingreso masivo de inversiones extranjeras.

privatizaciones, reestructuración estatal y en cuya resistencia se encuentra su supervivencia; y aquellos que integran una oposición moderada que reclama modificaciones parciales a la política de flexibilización pero que no buscan los lazos con el oficialismo (Benetti, 2012).

El fracaso de la resistencia contra las privatizaciones y el respaldo electoral a la política de reestructuración estatal en las elecciones legislativas de 1991, no hizo más que debilitar al sector y dar inicio a una fase de "unidad para negociar" a fin de preservar los contenidos fundamentales del arreglo institucional que sustentaba el poder de las organizaciones. En 1994, el desequilibrio económico y ocupacional resonó con el cimbronazo de la crisis del Tequila (Frenkel, 2033), dando paso a una nueva reconfiguración de la estrategia sindical, liderada por "nuevas formas de sindicalismo combativo más eficientes para canalizar el conflicto social" (Gómez, 2009:122). El movimiento obrero organizado se plantaba frente a dos alternativas: mantenerse fiel a la conducción peronista de Menem independientemente que su política resultare antagónica a los preceptos históricos de la doctrina justicialista, saliendo del modelo mercado-internista y arrollando las conquistas del movimiento en materia de derechos sociales, a cambio de preservar el poder de la corporación; o "romper con el gobierno, mantener el *viejo ideario* y construir alternativas programáticas para el conjunto de los trabajadores" (Merino, 2011). Estos nuevos actores comenzaron a dar cuenta de su poder de organización y convocatoria en 1994 por medio de marchas –Marcha Federal²¹ desde la Quiaca hasta Buenos Aires- y llamamientos al paro, marcando el inicio de la salida del inmovilismo sindical (Benetti, 2012).

Desde diferentes perspectivas sindicales surgen tres actores en oposición a la política del Estado: la Corriente Clasista y Combativa -CCC- liderada por Darío Santillán, procedente del sindicalismo clasista no peronista; la Central de los Trabajadores Argentinos -CTA- quienes "rompen con la CGT y también con el Partido Justicialista (...) critica de manera categórica al modelo sindical tradicional *dependiente del poder político y cómplice del económico*, constituyendo un hito en la

²¹ Organizada por nucleamientos gremiales opositores con acompañamiento del Frente Grande, la UCR y partidos de izquierda en oposición a la política económica, el desempleo y la flexibilización laboral. Se estima que la marcha concluyó en Plaza de Mayo con más de 50.000 personas.

historia del sindicalismo contemporáneo” (Gómez, 2009:126); y el Movimiento de los Trabajadores Argentinos -MTA- dirigido por Hugo Moyano del gremio de Camioneros. Fue el surgimiento de la CTA y las organizaciones piqueteras la mayor reforma a la estructura de poder sindical anterior.

El MTA se conformó con los gremios liderados por transporte -camioneros y colectiveros- que no acompañaron el reconocimiento de la CGT oficial en 1991. La decisión fue agruparse en una tendencia de oposición interna que no respondía a la conducción oficial pero cuyo objetivo era alcanzar la conducción de la Central. En 1994 camioneros, colectiveros, taxistas, trabajadores de dragado y balizamiento, portuarios, gremios de Aerolíneas Argentinas, judiciales, visitantes médicos, imprenteros de FATIDA, docentes de SADOP, periodistas de FATPREN, trabajadores de televisión SATSAID, papeleros, trabajadores de molinos UOMA, empleados de farmacia, trabajadores del SUP, cerveceros y trabajadores ceramistas formaban parte del MTA, fundado en el Congreso de Huerta Grande a fines del mismo año. El MTA asume el principio de unidad y fortaleza de los trabajadores bajo una sola Central, tomando distancia de la ruptura protagonizada por la CTA, “la concepción por la cual golpear a la conducción vigente por entreguista y contraria a los intereses de los trabajadores no significaba golpear sobre el modelo sindical construido a partir de 1945” (Merino, 2011:90).

La reacción del Estado se volvió más provocativa a partir de la reafirmación del poder de Menem en la reelección presidencial de 1995. Desde los sectores que se oponían a la política del gobierno se buscó erosionar el poder neoliberal manteniendo la confrontación abierta a las disposiciones socio-económicas presentadas por el mismo por medio de una estrategia de articulación entre los nuevos sectores gremiales -MTA, CTA, CCC-, nucleamientos estudiantiles, de jubilados, organizaciones de derechos humanos, entidades regionales; la CGT participó eventualmente. La metodología implementada no se limitó a la huelga, sino

que se extendió a procedimientos como: marchas, la instalación de la Carpa Blanca²² de los docentes frente al Congreso, bloqueos y cortes de rutas.

No obstante, en agosto de 1997 la fractura del movimiento obrero y el aislamiento político de las organizaciones sindicales opositoras fue puesta de manifiesto. Una huelga general fue convocada por la CTA, el MTA, la CCC, la UOM, partidos de izquierda y las 62 Organizaciones Peronistas, sin sostén y con desacuerdo de parte de la CGT y el PJ.

La década del '90 produjo entonces una transformación del aparato productivo, las relaciones laborales y el mercado de trabajo que hicieron inviable el juego sindical del primer peronismo -aun cuando la cúpula del sindicalismo cegetista logró participar del bloque de poder menemista y preservar la fuente económica de su poder, las obras sociales-. El Estado se despega de su rol mediador entre empresas y sindicatos, al tiempo que aplica "una serie de medidas desreguladoras hacia el mercado de trabajo, la acción sindical, la negociación colectiva y la seguridad social" (Novick, 2001:29). La modernización del Estado se llevó adelante por medio del disciplinamiento de los trabajadores -fundamentalmente en el sector de los trabajadores industriales- a través de la amenaza de la pérdida del empleo que produjo el decrecimiento en la conflictividad laboral, al tiempo que se incrementó el nivel de conflicto en el sector público, principalmente en el área educativa representada por ATE (Svampa, 2007).

El accionar de las organizaciones sindicales opositoras al neoliberalismo se volvió aún más combativo durante el gobierno de Fernando de la Rúa²³. La nueva ley de

²² "(...) la carpa blanca, levantada frente al edificio del Congreso, en cuyo interior ayunaban por tandas grupos de docentes representativos de todo el país y que iba recibiendo la visita de grupos escolares, variadas personalidades, pero también de deportistas y gente del espectáculo que en ocasiones realizaban exhibiciones públicas de solidaridad en el mismo lugar. Merced a ello, en 1997 hubo una creciente sensibilización de la opinión pública, cuyo punto de arranque fue la visibilidad de los docentes con salarios muy bajos y condiciones de trabajo adversas, pero se extendió merced al debate que se suscitó alrededor de la decadencia educativa. La fuerza del movimiento fue tal que logró, de hecho, el tratamiento del tema en su dimensión nacional luego que la ley federal hubiese derivado la cuestión educativa, y en particular los salarios, al ámbito de cada provincia" (Cheresky, 1999:84).

²³ La Alianza, producto de la confluencia entre la Unión Cívica Radical -UCR- y el Frente País Solidario -FREPASO-, gobernó el país entre los años 1999 y 2001 con Fernando de la Rúa como presidente y Carlos "Chacho" Álvarez como vice-presidente. El nuevo gobierno prometía transparencia y honestidad en lucha contra la corrupción, derogar las reformas de flexibilización salarial y dar batalla a la pobreza y la desocupación. Sin embargo, las coordenadas del gobierno neoliberal de Menem se mantuvieron, aumentaron

reforma laboral²⁴ puso fin a la posición moderada del MTA llevando a la ruptura de la CGT en marzo de 2000. Hugo Moyano se ubicó en contra de la nueva disposición avalada por el sector dialoguista de Rodolfo Daer. Moyano conforma la CGT disidente y llamó al primer paro general –de un total de siete- contra el gobierno de la Alianza. La convocatoria al paro puso de manifiesto el fuerte malestar por la continuidad neoliberal en materia de política económica, la flexibilización laboral y por la represión a trabajadores en General Mosconi²⁵. La CGT disidente demostró su capacidad de convocatoria y movilización, contando con la adhesión de la CTA (Merino, 2012) y los gremios de mecánicos -SMATA- y metalúrgicos de la UOM a la conducción del camionero.

Hacia el año 2003 la representación gremial se encontraba dividida en tres centrales sindicales. Como hemos mencionado anteriormente, se encontraba por un lado la CGT oficial a cargo de Rodolfo Daer reconocida por el Ministerio de Trabajo como la única entidad con personería gremial. Por otro lado, la CGT disidente dirigida por Moyano y la CTA de Víctor De Gennaro. Si bien los grandes sindicatos optaron por la supervivencia de la organización frente a las transformaciones en la estructura productiva nacional, lo que se modificó fue el balance de poder entre los gremios. Los cambios en materia de desregulación y apertura del mercado interno produjeron el surgimiento de nuevos sectores, especialmente en el área servicios con fuerte inserción en el mercado internacional en detrimento de la actividad industrial dedicada al mercado interno. La expansión del tercer nivel productivo se tradujo en una mejora de la posición de los trabajadores de servicios. Particularmente los sectores de alimentos, transporte y petróleo privado han sido beneficiados por los procesos de privatización y tercerización. Más todavía, debido al rol clave ocupado por los choferes de transporte con la apertura económica, la

los casos de corrupción –al año de asumir el PE se produce la renuncia del vice-presidente Álvarez quien acusa corrupción y sobornos en el Senado- y se profundizó el ajuste estructural requerido por los organismos internacionales de crédito.

²⁴ La nueva ley de flexibilización laboral de Cavallo se aprobó en el Senado a principios de 2000 en medio de denuncias de coimas, la renuncia de un vicepresidente y la ruptura de varios sectores de la política nacional, entre ellos la CGT.

²⁵ La represión de General Mosconi se produjo tras el intento de desalojo por parte del Estado a los piqueteros que cortaban la ruta en el norte de la provincia de Salta. Se trataba mayoritariamente de empleados de la construcción que reclamaban por el pago de salario en función del convenio del sector. El conflicto que debía ser disuadido por Gendarmería sin represión, derivó en un encendido enfrentamiento y dos personas muertas (Página 12, 01/06/2001).

integración del Mercosur y el desmantelamiento del sistema ferroviario, el gremio de Moyano emprendió una estrategia de expansión hacia otras actividades ampliando su campo de representación, poder y liderazgo durante el periodo. A partir de la apertura económica "(...) la creciente relevancia del transporte de cargas automotor situó a los camioneros como el nuevo sindicato hegemónico" (El Dilpó, Edición Nº157) habida cuenta de su alto poder de negociación basado en la posición estratégica dentro de la cadena productiva: "los empleados del transporte tienen la capacidad de interrumpir el proceso productivo 'hacia abajo', impidiendo la llegada de materias primas y trabajadores necesarios; y 'hacia arriba', imposibilitando la distribución de los bienes terminados. De aquí el importante efecto disruptivo de los conflictos en el sector, lo que incrementa el poder de negociación de sus trabajadores" (Benes y Fernández Milmanda, 2012:35).

2. La reapertura del diálogo

A partir de 2003 con el gobierno de Néstor Kirchner, el Estado nacional reabre el espacio político al conflicto sindical y a la cuestión salarial. Reintroduce instrumentos esenciales para la defensa de los intereses laborales y fomenta la puja por la supremacía del poder entre los grandes sindicatos. La deuda social del Estado y la recuperación del trabajo como articulador de ciudadanía y motor de inclusión social (Novick, 2006) configuran su estrategia. "Es el Estado el que debe actuar como el gran reparador de las desigualdades sociales en un trabajo permanente de inclusión y creando oportunidades" (Kirchner, 25/05/2003). "Hay que terminar con la teoría perversa de que la falta de trabajo y de inversión es por los altos costos laborales", "Tenemos que defender estas conquistas no como si fueran un hecho de vergüenza, sino con una realidad indiscutible a la que no se puede renunciar" (Página 12, 27/08/2003).

No obstante la fragmentación del arco sindical, el gobierno de Kirchner logró atraer la atención de las distintas organizaciones mediante la política de la *transversalidad*. La convocatoria a reconstruir los lazos de representación y de solidaridad entre los diferentes poderes y la sociedad recibió el apoyo inmediato de

la CGT disidente de Hugo Moyano y la CGT oficial a través del dirigente mercantil Armando Cavalieri. El acercamiento también se produjo con el representante de la CTA, Víctor De Gennaro, junto con los piqueteros Luis D´Elía y Juan Carlos Alderete. (La Nación, 6/6/2003)

Sorprendió la voluntad del gobierno de incentivar la acción industrial y sindical. Kirchner estableció por decreto la actualización del salario mínimo abriendo la discusión de modalidades y plazos entre los sindicatos y la patronal. "Yo creo que la inmensa mayoría del pueblo está viendo con sus propios ojos las decisiones muy firmes que está tomando el Presidente en defensa del pueblo y el Estado y que son reclamos que, en muchos casos, no se atrevieron a tomar por años los gobiernos anteriores del menemismo y el delarruismo" (Moyano en diario Clarín, 17/6/2003).

La recuperación del rol activo del Estado en materia de política laboral y el cambio de rumbo económico hacia una política macro habilitaron el espacio para la reaparición del conflicto gremial, las negociaciones colectivas y la puja distributiva.

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, Obreros y Empleados del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios – FNTC-

Hugo Moyano²⁶, líder del MTA y del sindicato de Camioneros, logró convertirse en actor sustancial de la reapertura del diálogo y en la modificación del vínculo entre el Estado nacional y los sectores sindicales.

Para 2003, Moyano englobaba bajo la dirección de la CGT disidente y de Camioneros a todo el conjunto de trabajadores correspondientes a las actividades de transporte de caudales, la recolección de residuos, el correo y la logística. Durante el gobierno de Kirchner la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros logró expandir su nivel de representación incorporando una variedad de ramas de

²⁶ En 1987 Hugo Moyano toma la conducción de Camioneros en la provincia de Buenos Aires y asume como Secretario General de la Federación de Camioneros en 1992.

actividad²⁷, jugó un papel clave en la determinación de la política salarial y logró demostrar un alto poder de movilización en el espacio público.

Como decíamos en el apartado anterior, el sector comandado por Moyano aparece con fuerza en la órbita nacional a partir de las reformas de mercado de los años 90. A diferencia del rol secundario desempeñado durante las décadas anteriores -no lograba alcanzar altos niveles de negociación o el desempeño de cargos de relevancia dentro de la CGT-, el poder de negociación del sector logra adquirir una posición de relevancia estratégica a partir del proceso de modernización económica. El nivel de generación de empleo y la capacidad de presión sindical posicionan al sector como el actor gremial de mayor relevancia en el ámbito de las relaciones laborales del país (Pontoni, 2001).

El desmantelamiento de la producción metalúrgica y el consiguiente proceso de desindustrialización acompañado por la apertura económica, el surgimiento del Mercosur y el fin del transporte ferroviario de carga situó al sector del transporte automotor en un lugar de privilegio frente al resto de las actividades productivas. La necesidad del sector productivo de garantizar la circulación de productos de manera efectiva, eficiente y flexible dio paso al desarrollo del transporte automotor de cargas por sobre el modo de transporte anterior, el sistema ferroviario no resultaba funcional a las necesidades del mercado y había ya quedado relegado al transporte de los grandes volúmenes del sector primario. Esta transformación en la estructura productiva y el consiguiente reposicionamiento del sector del transporte automotor generó también una modificación en la matriz de poder sindical. El sindicato de Camioneros se posicionó al frente de la representación gremial del sector más combativo de la CGT. A cargo del MTA y la CGT disidente desde el 2000, consiguió crear poder por medio de la resistencia a las reformas laborales y la oposición a la

²⁷ Las ramas de actividad representadas por Camioneros son las siguientes: 1) Transporte de Cargas en General; 2) Rama de Transporte pesado y grúas móviles; 3) Rama Transporte de Caudales; 4) Rama Transporte de Clearing y Carga Postal; 5) Rama Servicio de Recolección y/o Compactación de Residuos y/o Barrido y Limpieza de Calles, Vía Pública y/o Bocas de Tormentas y Tareas Complementarias y/o Afines; 6) Rama Transporte y Distribución de Diarios y Revistas; 7) Rama Transporte de Combustible Líquidos; 8) Rama Transporte de Materiales Peligrosos; 9) Rama Transporte y/o Logística para la Actividad Petrolera; 10) Rama de Expreso, Mudanzas y Encomiendas y/o Fletes al Instante; 11) Rama de Transporte y Distribución de Aguas, Gaseosas y Cervezas; 12) Rama de Operaciones Logísticas, Almacenamiento y Distribución; transporte de fríos y congelados y la de corralones (Pontoni, 2013).

connivencia neoliberal de la CGT oficial. Logró instalarse en el espacio nacional por medio de una acción de lucha caracterizada por el bloqueo, garantizando la notoriedad pública del conflicto y de la capacidad de paralización de la organización. La elección de esta modalidad de protesta, puede ser interpretada como la voluntad por parte de un nuevo actor político de “construirse una reputación frente a los demás actores. Instalarse en la arena política como el actor poderoso que es, requiere exhibir esa fortaleza adquirida” (Benes, Fernández Milamanda, 2012:50).

Al momento de asunción de Kirchner, Moyano se encontraba bien alejado del oficialismo de la CGT de Daer a quien Kirchner consideraba menemista y constitutiva del bloque de “los que llevaron a la Argentina de la desocupación” (La Nación, 11/3/2004). Desde el comienzo de la presidencia de Kirchner, Moyano se mostró dispuesto a acompañar y cooperar en la puesta en marcha del nuevo modelo de Estado propuesto desde el Poder Ejecutivo. A lo largo del período puede observarse la participación de la acción de Hugo Moyano en el proceso de construcción del liderazgo presidencial de Néstor Kirchner.

3. La recuperación de espacios institucionales y atributos económicos

Como mencionábamos al comienzo del capítulo, el acuerdo institucional sindical dio lugar a la institucionalización y regulación de las organizaciones de trabajadores. El poder de las mismas estaba fundamentado en proporción a su número y su participación en la determinación de la política económica. Este poder político fue ampliado desde mediados de los años de 1960 al campo económico desde que la prestación del servicio de salud fue incorporada bajo la órbita sindical.

Estos espacios políticos y económicos de privilegio fueron desarticulados por las transformaciones de la estructura productiva y la flexibilización en la política laboral. El proceso de desindicalización pareció barrer casi completamente con el poder del sindicalismo. Sin embargo, nuevos sectores –además de la cúpula dialoguista de la CGT oficial- surgidos a la luz de la apertura económica aparecían combativos y bajo la bandera del cambio. ¿Se trató del surgimiento de un nuevo tipo de gremialismo diferente a la configuración sindical peronista tradicional?, ¿o nos encontramos

frente a nuevos sectores –de modalidad vieja/tradicional- que reclaman espacios en la estructura institucional y en la configuración de la política nacional? ¿Cuáles son los elementos de poder que pone en juego la CGT en la era kirchnerista?

Derogación de la ley Banelco

Se conoce como la “ley Banelco” a la norma N° 25.250 de Flexibilización Laboral promulgada y sancionada durante el gobierno de Fernando de la Rúa. La denominación “Banelco” –que remite al Banco Banelco- alude al uso de sobornos en el Senado para lograr su aprobación. Se supone que los votos adquiridos por la misma en el Congreso Nacional han resultado favorables a cambio de prebendas otorgadas a algunos legisladores.

La ley de Flexibilización Laboral promovida por la Alianza en el año 2000 garantizaba la continuidad del esquema laboral establecido durante el gobierno de Menem. La reforma laboral de 1991 reglamentó un nuevo papel del Estado en la relación capital-trabajo, dando paso a la desestructuración del mercado de trabajo por medio de la flexibilización de los contratos y una diversidad de “nuevas modalidades de contratación”, que agilizaban la entrada y salida del mercado laboral. De modo que la introducción del sistema “flexible” afectaba, por una parte al modelo de estabilidad laboral por tiempo indeterminado, y por otra, propiciaba la reducción de los costos laborales para los empleadores por medio de la abolición de indemnizaciones por despido y de la reducción de aportes patronales en relación a prestaciones sociales. Entonces desde un rol “de no intervención”, el Estado, promovió nuevas modalidades de gestión individual de los riesgos por accidentes y enfermedades de trabajo, desempleo, pensiones jubilatorias, etc. Al mismo tiempo que incentivó la descentralización sindical y la retribución de haberes por nivel de productividad.

A pesar de las críticas y el reproche de la sociedad frente al estado de la política laboral, el gobierno de De la Rúa promulgó la ley de flexibilización que corría a los sindicatos del monopolio de la negociación colectiva, descentralizando su rol hacia niveles inferiores de resolución. La modificación del marco de la negociación

colectiva fue acompañada consecuentemente por el aumento del trabajo no registrado alcanzando el 44.8% y niveles de desempleo del 21.5% en 2003.

A los meses del inicio de su mandato, el gobierno de Kirchner sorprendió al solicitar la derogación de la ley 25.250 y su reemplazo por el proyecto de ley de Ordenamiento del Régimen Laboral. El proyecto de ordenamiento laboral fue confeccionado desde el Ministerio de Trabajo y consensuado por las tres centrales sindicales y la Unión Industrial Argentina –UIA-. El Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, expresaba: “El explícito propósito de este ordenamiento normativo es el de rechazar el empleo precario, facilitar el desenvolvimiento de las pequeñas y medianas empresas para que creen más empleo, estimular la negociación colectiva, incrementar el área de responsabilidad y participación de los actores sociales, perseguir al fraude laboral y garantizar en la mayor medida el cumplimiento efectivo de las normas laborales y previsionales” (La Nación, 3/3/2004).

El oficialismo logró encolumnar detrás de la nueva ley a la totalidad del PJ, a la UCR y a legisladores de otros partidos. La nueva ley de trabajo N° 25.877 fue aprobada el 2 de marzo de 2004.

Negociaciones Colectivas y la convocatoria al Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil

En palabras de Héctor Recalde: “La legislación de convenios colectivos de los noventa generó un escenario de negociación tendiente a la pauperización de las condiciones de trabajo, a la regresiva distribución del ingreso y a la concentración económica en los sectores dominantes. Así alteraron la esencia de un instrumento superador de los derechos de los trabajadores, incorporando en los convenios formas precarias de contratación (basura) que afectaban la estabilidad en el empleo” (Página 12, 18/5/2008). Por lo tanto, la derogación de la ley 25.250 de flexibilización laboral aprobada en el 2000 resultaba crucial para destrabar la participación sindical y estatal en materia de política salarial.

El cambio de rumbo de la posición del Estado al respecto tuvo su manifestación primera con la actualización del Salario Mínimo Vital Móvil por el presidente Kirchner. El incremento salarial, congelado desde 1993, fue decretado el 1º de julio de 2003 para todos los trabajadores del sector público y privado (Rial, 2009). En los meses siguientes el gobierno “estableció un aumento salarial de 130, 150 y 200 pesos durante 2003 y aprobó dos aumentos adicionales de 50 y 100 pesos en 2004 y 2005, respectivamente” (Etchemendy, Collier 2008:184). Desde los sectores sindicales la satisfacción no se hizo esperar: “este Gobierno está haciendo bastante, bastante parecido a lo que uno piensa”, con este decreto dio paso al “descongelamiento de los salarios” y al inicio de “una nueva política salarial y laboral” (Hugo Moyano para La Nación, 30/12/2003).

Hacia 2004 el nivel de conflictividad laboral había aumentado en un 50% en relación al año 2000. No obstante, la conflictividad se encontraba limitada a las disputas salariales y a las condiciones de trabajo, dentro de un marco institucional de diálogo entre representantes sindicales, patronales y del Estado. En tanto que, “las huelgas fueron de naturaleza económica, con muy pocas huelgas políticas. (...) en el periodo 2003-07. Tanto la CGT (aliada con el gobierno) como la más progresista CTA se abstuvieron de convocar a huelgas generales contra la administración de Kirchner” (Etchemendy, Collier, 2008:157). El sindicalismo no planteó paros “ideológicos” al gobierno. “La relación de Kirchner con la CGT es muy buena, sobre todo a partir del diálogo que tiene con Hugo Moyano, formalizado como principal líder de la CGT” (La Nación, 05/12/2004).

La convocatoria al diálogo se llevó adelante a través de medios institucionales: convocatoria del Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil y las convenciones colectivas. Ambos instrumentos claves en el restablecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores y del rol de las organizaciones sindicales como interlocutores cruciales en la determinación de la política laboral. “Desde un punto institucional, su logro más notorio –además de la reinstalación del salario mínimo como valor de referencia-, fue lograr que las comisiones técnicas creadas al efecto, además de la discusión salarial, ampliaran el

debate hacia materias socio-laborales como la formación profesional, la productividad y las prestaciones por desempleo” (Tomada, 2007).

El conflicto salarial se manifestó de manera contundente en más de una oportunidad -durante los años 2005, 2006 y 2007- como paso previo a la apertura de paritarias. No obstante, el acuerdo alcanzado por los diferentes sectores encontró su techo en el nivel de inflación anual estimado desde el gobierno. En cada oportunidad, el sindicato de camioneros actuó, en convenio con el gobierno, como caso testigo de negociación colectiva.

Entre esos años los niveles de movilización y militancia gremial volvían a recuperar el vigor de épocas pasadas dando paso a conflictos acalorados en ocasión de los acuerdos salariales. Las dificultades por demoras en la discusión paritaria se centraron fundamentalmente en los sectores de ferrocarril, transporte, automotriz y de alimentación. Hacia finales de 2005, Pablo Moyano, desde el sindicato de Camioneros, decidió intensificar el reclamo por medio de protestas y maniobras de bloqueo en empresas como Loma Negra, Molinos Río de la Plata, la cervecería Quilmes, la paralización del transporte de caudales, algunos sectores del correo y la paralización parcial de la recolección de residuos en algunas áreas del conurbano bonaerense. La modalidad de bloqueo es parte principal de la lógica *moyanista* para demostrar capacidad de movilización y disrupción en el espacio público. La operación de este tipo de maniobras en los grandes centros urbanos le ha permitido captar alta notoriedad pública y cobertura de los medios de comunicación, anticipando el nivel del acuerdo salarial a inicios de 2006. “El aumento del 19 por ciento negociado por los camioneros convergió con los criterios anti-inflacionarios del Ministerio de Economía —la inflación crecería un 9,8 por ciento durante el 2006— y fue utilizado informalmente para fijar los parámetros en otras negociaciones salariales sectoriales” (Etchemendy, Collier, 2008:166). Los sectores en conflicto acordaron incrementos salariales según el tope alcanzado por los camioneros. “Los trabajadores van a seguir pidiendo aumentos en el 2006. Todas las organizaciones gremiales lo van a hacer, como ocurrió en el 2005” (Moyano, La Nación, 18/12/2005).

Más allá de que los principales interlocutores de Moyano sean los Ministros de Trabajo y Planificación Federal, Carlos Tomada y Julio De Vido, es el encuentro con el propio presidente Kirchner que permite calmar la situación de protesta y alcanzar el acuerdo salarial. "Expreso mi satisfacción por haber arribado a un acuerdo bastante importante, que va a posibilitar que los trabajadores mejoren sus remuneraciones y que contribuye con la política que está llevando el Gobierno" (Hugo Moyano para La Nación, 5/4/2006). Moyano y el Presidente se ayudan y potencian mutuamente. La foto del acuerdo salarial de los camioneros en la Casa Rosada fue elocuente. Por un lado, Kirchner disfrutó mostrándose como el hacedor de los acuerdos salariales. Por el otro, el jefe de la CGT se regodeó de las ventajas que le concede su estrecho vínculo con el mandatario (Página 12, 7/4/2003).

La convocatoria a la discusión tripartita en el Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil se produjo en tres ocasiones durante el gobierno de Néstor Kirchner. "En agosto de 2004, junio de 2005 y de nuevo en julio de 2006, el gobierno se alió con la CGT y la UIA (Unión Industrial Argentina), junto con las asociaciones de comercio, construcción y de los bancos (con la oposición de la más radical CTA y las organizaciones empresariales del campo), para negociar un nuevo mínimo salarial. El Consejo del Salario Mínimo se encontraba convocado para reunirse nuevamente hacia mediados de 2007" (Etchemendy, Collier, 2008:169). El Consejo del Salario es un órgano de diálogo permanente entre el Estado, organizaciones representantes de los trabajadores y la cámara empresarial. Su función es determinar periódicamente el salario mínimo, vital y móvil para todos los trabajadores del sector público y privado bajo el objetivo de "evaluar los temas que las relaciones laborales de la República Argentina reclaman, tales como la redistribución del ingreso, el compromiso con la generación de empleo genuino y decente y el combate al trabajo clandestino, entre otros, involucrándolo en la programación y diseño de políticas activas que permitan comenzar a ver nuestra realidad y futuro desde una perspectiva distinta" (Decreto 1095/2004). Acorde al ministro de Trabajo, Carlos Tomada: "El Consejo es el ámbito, de máximo nivel, en el que se reproduce un poco lo que es la negociación colectiva, obviamente

que la CGT tendrá su posición y el empleador el suyo, cada uno tendrá sus fundamentos y el Estado ayudar a alcanzar un consenso” (Página 12, 24/07/2006).

La prioridad desde el gobierno fue la reapertura del diálogo y el consenso en la negociación entre sindicatos y empresas como herramienta institucional. Además de permitir la recuperación por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de su competencia de control y fiscalización en “el cumplimiento de la seguridad social en todo el territorio nacional y aplicar las penalidades correspondientes en caso de detectar incumplimientos” (Rial, 2009:178), reduciendo la vulnerabilidad de los sectores con menor capacidad de negociación y al mismo tiempo proveer de una instancia alternativa de discusión y reclamo por parte de las organizaciones de trabajadores (Novick, 2006). Desde la cúpula de la CGT se jugó un doble papel, en la promoción de la protesta y la movilización en las disputas salariales, y al mismo tiempo, se buscó moderar los reclamos a fin de mantener el alineamiento y las buenas relaciones con el gobierno (Etchemendy, Collier, 2008).

A partir de la puesta en funcionamiento del Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario, se logró mejorar el nivel adquisitivo del salario mínimo en un 215% entre los años 2003 y 2006 (Novick, 2006). Además, “la densidad y el alcance del proceso de negociación colectiva ha dado lugar a un fortalecimiento institucional decisivo para el país” (Tomada, 2007:83), el MTEySS estima que entre 2003 y agosto de 2007 fueron homologados aproximadamente 607 convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

Desde el gobierno el resurgimiento del conflicto laboral es tomado como un indicador positivo, siempre dentro del marco de las negociaciones laborales en la búsqueda de consenso. Además que, desde las centrales sindicales, los reclamos respondieron a cuestiones económicas frente a las empresas no contra la administración de Kirchner. La recuperación de la acción sindical y los reclamos salariales resultan pertinentes y lógicos a la recuperación de la economía y del mercado de trabajo.

Reunificación de la CGT

La reunificación de la CGT no sólo responde a la búsqueda desesperada por parte de los gremios de recuperar el protagonismo perdido, sino que formó parte de la agenda de Kirchner a fin de encauzar la conflictividad social y laboral. Si bien el acuerdo de unidad no se conseguiría de la noche a la mañana y no sin antes suscitar presiones y resistencias, “los sindicalistas quieren que la unidad sea tomada como una demostración de madurez para que el presidente vuelva a otorgar espacio de juego político al gremialismo” (La Nación, 15/7/2004).

El proceso de negociación para la reunificación se intentó hacia fines de 2003, aunque sin alcanzar buen puerto dado que los protagonistas no estaban dispuestos a aceptar la unidad a cualquier costo, sobre todo cuando ambas CGT consideraban que comenzaban a recibir el suficiente reconocimiento por parte del Gobierno (La Nación, 27/12/2003). Lo que se buscaba, particularmente desde la CGT de Daer, es que quien ocupara su lugar surgiese del número mayoritario de votos en el congreso cegetista previsto para marzo de 2004.

La puja por la Secretaria General marcaba el escenario. Desde la CGT oficial las diferencias se presentaban como irreconciliables con el moyanismo, particularmente de parte de los dirigentes Carlos West Ocampo -Sanidad- y con Armando Cavalieri -Mercantil-, y por tanto no apoyaban la candidatura de Moyano y amenazaban con la posibilidad de frenar la asistencia de congresistas al plenario y de ese modo vaciar de consenso la convocatoria sindical.

De parte de la CGT disidente se apostaba, con el apoyo del gastronómico Luis Barrionuevo, a la candidatura de Moyano como único Secretario General. Moyano contaba, asimismo, con el respaldo de la comunicación directa con el Poder Ejecutivo, lo que lo posicionaba como el ganador de la contienda.

Una tercera posición más flexible, encabezada por el dirigente de Luz y Fuerza Oscar Lescano, se apartaba del “antimoyanismo” pero tampoco confiaba en las intenciones de Barrionuevo de convertir la CGT en el bastión de oposición al gobierno. De modo que se inclinaba por la propuesta de establecer un órgano colegiado para conducir la CGT.

Así las cosas e intentando respetar la tradición sindical, se buscaba acordar la nueva dirigencia en instancia previa a la celebración del congreso ordinario que se desarrolló el 14 de julio de 2004.

Luego de meses de conversaciones entre las cúpulas, la voluntad imperante era el establecimiento de un triunvirato, de apariencia colegiada, pero que de manera gradual fuera reconociendo como única autoridad a Moyano. En ese esquema, "los gordos" y el sector más menemista de la CGT oficial conducido por Barrionuevo, flanquearían al camionero, de manera tal de no aparecer cediendo poder. Sin embargo, "los gordos" patearon el tablero a última hora y decidieron subir la apuesta: pidieron que cada miembro del "triumvirato" tuviera el mismo peso. O sea, que sea una verdadera conducción colegiada, acotando los márgenes de acción de Moyano (Página 12, 14/7/2004).

La necesidad de unificar la CGT y garantizar el monopolio de la representación de los trabajadores desde una única central se fundamentaba en el interés de formar parte del proceso de toma de decisiones político, de detentar el suficiente poder a la hora de sentarse a discutir paritarias con el gobierno y los empresarios. La convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, la discusión de políticas de empleo y el aumento salarial eran los ejes principales a desarrollar por la nueva conducción colegiada.

A pesar de las diferencias, el congreso unificador se llevó adelante y las dos CGT quedaron reunificadas bajo la conducción de un triunvirato integrado por Hugo Moyano, Susana Rueda²⁸ de Sanidad y José Luis Lingeri de Obras Sanitarias, que ocuparían el cargo durante un plazo máximo de un año. Para evitar la falta de acuerdo se optó por la adopción del mecanismo colegiado que fue confirmado por unanimidad de 1550 delegados.

De todas formas, el acuerdo formal alcanzado entre "los gordos" y el ala disidente comandada por Moyano comenzó a mostrar sus diferencias. La preeminencia de Moyano resultaba tangible tanto en cuanto a su capacidad de

²⁸ El 5 de mayo de 2004 se desarrolló un congreso extraordinario bajo el rotulo "operativo unidad de la CGT" para modificar los estatutos de la central a fin de permitir la inclusión del cupo femenino -33 por ciento- en la conducción.

convocatoria y movilización de amplios sectores de trabajadores como a su relación de cercanía con la Casa Rosada. “Los representantes de gremios emblemáticos como el mercantil, el de mecánicos, el de sanidad y el de Luz y Fuerza, se quejan del personalismo del camionero Hugo Moyano. Lo acusan de monopolizar para su propio sindicato los beneficios de su cercanía a Néstor Kirchner y no toleran que el primer mandatario no los reciba (...). Desde el sector de Moyano se los descalifica porque durante el menemismo apoyaron el acuerdo marco que permitió la flexibilización laboral y, en el delarruismo, aplaudieron la ley Banelco de reforma laboral” (La Nación, 3/6/2005).

En julio de 2005 la puja interna terminó con el triunvirato y se alcanzó la elección de Moyano como nuevo Secretario General de la CGT, quien logró asumir el cargo, a pesar del descontento de los sectores dirigidos por Rueda y West Ocampo, Lescano, Maturano de La Fraternidad, Cavalieri de Empleados de Comercio, y del ex Secretario Rodolfo Daer.

Cabe destacar que el proceso de reunificación de la CGT fue impulsado desde el gobierno de Kirchner con el objetivo de contener el conflicto laboral institucionalmente, al tiempo que cooperó en la consolidación del liderazgo y legitimidad de Moyano al frente de la Central. A pesar de las reuniones y guiños concedidos hacia la CTA durante el periodo, el gobierno nacional decidió no otorgar la personería gremial a esta entidad, manteniendo el monopolio de la representación bajo la circunscripción de la CGT.

Subsidio al Transporte Automotor de Cargas –TAC-

En 2005 el gobierno de Kirchner impulsó la aprobación de un subsidio que resultó en el principal atributo económico adquirido por Moyano durante el periodo. Por medio del Régimen de Fomento a la Profesionalización del Transporte de Cargas -Refop- el gobierno buscaba garantizar la formalización de los trabajadores del transporte y otorgaba, por un lado, respaldo institucional y económico a la FNTC a través del incremento en el grado de sindicalización del gremio. Por otro lado, las empresas transportistas recibían el reintegro de una parte de los aportes patronales

mediante el cobro de subsidios directos, siempre que los trabajadores estuvieran afiliados al sindicato de Camioneros.

Este beneficio resultó posible gracias a la implementación del impuesto al gasoil por medio de la ley 26.028 y cuya reglamentación incluye la disposición que asigna el 7% de este impuesto al Refop. En la práctica, el funcionamiento del Refop aparecía como un subsidio al salario de los trabajadores sindicalizados, permitiendo el abaratamiento del costo de los salarios a las empresas transportistas. Al mismo tiempo funcionaba como un influyente en la afiliación de trabajadores a la FNTC.

Junto a Benes y Fernández Milmanda (2012), entendemos que la adjudicación del subsidio Refop en beneficio directo del sindicato dirigido por Moyano se debe a una decisión política tomada por Kirchner y responde al vínculo de intercambio político y de construcción de poder entre ambos actores. Del mismo modo, la incorporación de cuadros sindicales en la Secretaría de Transporte de la Nación²⁹ ha contribuido a garantizar el espacio de la FNTC en la política subsidiaria hacia el sector.

4. Los límites a la acción sindical y la posición del Estado

Como señalan Oszlak y O'Donnell (1981), los actos de política estatal no pueden ser tomados como respuestas aisladas a determinada cuestión, sino que, a partir del contexto³⁰ nos permiten inferir la posición del Estado frente a una cuestión que atañe a sectores determinantes de la sociedad. Creemos que, la posición del Estado se mide desde el sindicalismo que resurge al mando de Moyano. Así como aparece el juego de construcción de poder que vincula a ambos actores por medio del manejo de los tiempos en cuanto a los momentos de los conflictos.

²⁹ “La FNTC controló desde julio de 2003 hasta abril de 2012 la Subsecretaría de Transporte Automotor de la Secretaría de Transporte de la Nación (STN), espacio institucional desde el cual se administraban los subsidios al TAC, a partir de la llegada de Jorge González, hombre de estrecha ligazón con el gremio” (Benes, Fernández Milmanda, 2012:40).

³⁰ Oszlak y O'Donnell sostienen que el contexto consiste de aquel conjunto de factores extrínsecos al objeto más específico de investigación -“políticas estatales”- que es indispensable para la comprensión, descripción y explicación de aquel objeto y sus efectos sobre otras variedades.

De parte de Moyano la declaración de conflicto³¹ y la búsqueda de soluciones parte del estilo tradicional sindical: "golpear para después negociar"³² y de la posición estratégica que ocupa el transporte dentro de la cadena productiva. Posición que le otorga alto poder de negociación y de interrupción en el movimiento de bienes y personas. Aplica generalmente una metodología basada en la movilización y en el bloqueo del proceso productivo que le permite demostrar fuerza e injerencia en el proceso de toma de decisiones. Aún cuando desde la mirada de especialistas en movimientos sindicales como Julio Godio "Moyano se mueve dentro de un acuerdo táctico con Kirchner, para controlar que las demandas de los trabajadores no afecten la política no inflacionaria" (La Nación, 6/4/2006).

El gobierno de Kirchner se posiciona desde el rol clave asignado al conflicto sindical, especialmente a Moyano, en la búsqueda de construcción de un pacto social "al estilo Kirchner" (Página 12, 4/11/2006). Estilo que, según Alfredo Zaiat, será definido por la determinación de acuerdos salariales por empresa y por sindicato a partir de un tope definido por el acuerdo alcanzado por Camioneros –Moyano– manejado personalmente por el presidente.

Moyano vs. Carrefour

O también conocido como el conflicto de encuadramiento con el gremio de Empleados de Comercio. Conflicto que tuvo lugar entre Moyano desde el sindicato de Camioneros, Cavalieri desde Comercio y la compañía multinacional Carrefour.

Aquí se cristalizan dos aristas en juego. Por un lado, la oposición entre Moyano y Cavalieri del sindicato de Comercio por la representación de los trabajadores empleados por esta última. Por otro lado, el inicio de la puja entre Moyano, Daer y los Gordos por la unificación y conducción de la CGT.

³¹ Por conflicto laboral se entiende la serie de eventos desencadenada a partir de una acción conflictiva realizada por parte de un grupo de trabajadores o empleadores con el objeto de alcanzar sus reivindicaciones laborales. Según esta definición, un conflicto laboral puede incluir varias acciones conflictivas (MTEySS, 2007).

³² "Golpear para negociar", el secreto del poder sindical OUM conducido por Augusto Timoteo Vandor a mediados de los años 60. Y lo sigue siendo para el áspero camionero Hugo Moyano. "Moyano se ubica poéticamente con una idea de sindicalismo vandorista. La mejor defensa es estar en una permanente actitud firme y generando resultados permanentes: aumentos salariales, condiciones de trabajo, eso es lo prioritario. Es un resultadista y desde allí hace luego sus exploraciones políticas" (La Nación, 16/10/2005).

La disputa entre el gremio de Camioneros y el sindicato mercantil de Armando Cavalieri por el encuadramiento sindical³³ de 350 trabajadores de Carrefour comenzó en octubre de 2003 en el centro de distribución de la localidad de Esteban Echeverría -centro de distribución adquirido por Carrefour en julio del mismo año-. Según la empresa, el contrato de los trabajadores debía regir según el Convenio Colectivo de Empleados de Comercio (Nº 130/75), respaldado en lo que se conoce como el principio de actividad principal. Según Cavalieri, dado que en Carrefour la actividad principal es el comercio, todos sus trabajadores, incluso los del centro de distribución de Esteban Echeverría, deberían regirse por el convenio mercantil. Al tiempo que la empresa decidió meterse de lleno en la disputa por medio de solicitudes y expresiones de su directivos, complicando aún más la situación. A partir de la modificación en el convenio, Carrefour se vería obligada a aumentar el salario de ese personal en casi el 40 por ciento (Página 12, 30/10/2003).

La puja se resolvió por intervención del Ministerio de Trabajo -Resolución 263- en base al reconocimiento del arco de representación de la FNTC. La Federación no sólo nuclea a los trabajadores camioneros, sino que su representación se amplía a una variedad de actividades económicas como logística y distribución, carga y descarga de mercaderías, entre otras, lo que "le ha permitido disputar a otros sindicatos la representación de trabajadores pertenecientes a: correos, supermercados, establecimientos mayoristas, entre otros. Este alcance personal de Camioneros suele entrar en colisión con la de otros sindicatos por la actividad específica de la empresa donde se desempeñan los trabajadores" (Pontoni, 2013:104).

Dicha resolución generó el descargo del sindicato de Cavalieri y de la empresa Carrefour ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, frente a la cual Moyano respondió con la reactivación de la protesta. En febrero de 2004 el bloqueo al ingreso y salida del transporte de mercadería se extendió a 29 establecimientos de la marca buscando el desabastecimiento y el acatamiento al reclamo comandado por

³³ El conflicto de encuadramiento sindical refiere a la disputa entre dos gremios con personería jurídica por la representación de los trabajadores de una actividad profesional. Un conflicto inter-sindical de encuadramiento es de derecho, y se refiere a la disputa entre dos asociaciones con personería gremial, sobre la capacidad jurídica que emana de sus respectivas personerías que procuran demostrar cuál de ellas es la más representativa respecto de una categoría profesional de trabajadores.

Moyano. Al mismo tiempo, Moyano instaba un veredicto al gobierno nacional: "No es posible aceptar que estas empresas multinacionales, que con Menem (Carlos) hicieron lo que quisieron, ahora se den el lujo de no cumplir con la ley" (La Nación, 22/01/2004).

Entretanto, el Ministerio de Trabajo resolvió terminar con el problema imprimiendo una cuantiosa multa a la cadena de hipermercados por incumplimiento de la resolución ministerial de octubre de 2003. Carrefour decidió entonces, acordar el traspaso de los trabajadores al convenio de Camioneros.

La otra arista del conflicto, unificación y conducción de la CGT, también se hizo presente. Moyano –en su calidad de dirigente de la CGT- insistió en que "Cavalieri no tiene autoridad moral para defender a los trabajadores y, por eso, tiene que salir la empresa a decir lo que debería decir el gremio" (Clarín, 19/10/2003), "Qué le interesa a Carrefour si yo voy por más o por menos. Qué problema tiene que yo reclame otros afiliados de otras actividades del transporte. Esto demuestra claramente que Carrefour está tratando de extorsionar al Gobierno con las solicitadas..." (La Nación, 20/10/2003).

Moyano dió inicio al "coqueteo" con el Poder Ejecutivo y se valió de la distancia de Kirchner frente a los "gordos" de la CGT oficial. Comenzó a presentarse como aliado del presidente, exteriorizando su alineamiento político. "El dirigente camionero tiene acceso directo a Kirchner, mientras que el mercantil soporta la desconfianza presidencial por su pasado menemista" (La Nación, 30/10/2003).

La cuestión Carrefour dispuso la intercesión del Estado frente a una cuestión de conflicto inter-sindical. La metodología del bloqueo utilizada por Moyano incurrió, en este caso, en la transgresión de derechos de propiedad y en una restricción ilegítima a ejercer toda industria lícita. Sin embargo, el gobierno respondió de modo favorable al reclamo sindical de Moyano y dio inicio al acercamiento entre el líder sindical y Kirchner, quien intentaba evitar toda confrontación que pudiera ocasionarle perjuicios a la gobernabilidad del nuevo gobierno, "fuentes oficiales revelaron que el Presidente ordenó que se resolviera cuanto antes el conflicto debido a que no quería tener un frente abierto con un gremio poderoso como el de Moyano" (La Nación,

30/10/2003). Desde el gobierno no intervinieron límites a la acción de Camioneros ni a su procedimiento de protesta. Así como la eventualidad del conflicto abrió el espacio a la carrera por la conducción de la CGT y posicionó a Kirchner frente a la oportunidad de lograr la unificación de la Central sindical.

Moyano vs. Coto

Durante los días 4, 5 y 6 de marzo 2005 tuvo lugar el segundo conflicto por encuadramiento sindical protagonizado por Moyano y Cavalieri. En este caso se trató de la puja por la representación de los trabajadores de la empresa Coto, filial de Esteban Echeverría en la provincia de Buenos Aires. El gremio de Camioneros buscaba incorporar 700 de los 1300 empleados de ese centro de distribución, que dependían del gremio de Empleados de Comercio. La acción de protesta se llevó adelante por medio del bloqueo a la salida de camiones de Esteban Echeverría afectando el abastecimiento de la cadena de supermercados. El gobierno bonaerense intentó contener el conflicto por medio del desalojo de los manifestantes, aunque sin éxito y con violenta respuesta por parte del gremio. Hacia el final de la jornada, el enfrentamiento contaba con una veintena de heridos y militantes sindicales detenidos.

Seguido al hecho y a la orden presidencial: "No me importan las explicaciones que me den. Solucionen este tema ya" (La Nación, 4/3/2005), el conflicto entre Moyano y la empresa Coto llegó a un acuerdo. En el mismo intervinieron: el Ministerio de Trabajo provincial que dictó la conciliación obligatoria, comprometiendo a la empresa y al sindicato a recomponer las medidas aplicadas, y el MTEySS decidió respecto a la cuestión del encuadramiento de los trabajadores. El ministerio de Tomada intimó a la CGT a dirimir el conflicto entre Camioneros y Comercio: "El ministerio es competente para intervenir en el conflicto, pero el procedimiento establece que antes debe agotarse la vía asociacional. Como los dos sindicatos que se disputan la representación de los trabajadores integran la CGT, se debe tratar de llegar primero a una solución allí" (Norberto Ciaravino para Página 12, 5/3/2005).

Desde la presidencia el conflicto generó incomodidades y resquemores debido al empañamiento del acto que anunciaba la salida del default³⁴ para la Argentina. La molestia de Kirchner se centró principalmente en Moyano a quien se estima apercibió por el momento inoportuno de la demanda y por la gravedad del enfrentamiento con la gendarmería. El incidente suscitó una amplia cobertura de los medios de comunicación y se temió que opacara el anuncio de la reestructuración de la deuda económica.

El conflicto concluyó en el mes de mayo por dictamen del Comité Arbitral de la CGT en favor del gremio de Camioneros. La disputa por el encuadramiento sindical de 700 trabajadores se resolvió bajo el factor determinante de que los empleados en cuestión permanecían al área de logística y por tanto debían ser incorporados a la Federación de Camioneros.

Los conflictos por encuadramiento propiciados por Moyano fueron viables a partir de la resolución 144/2003 del METySS que autorizó a la redefinición de la actividad del sector como "logística". Esta nueva denominación permitió a Moyano ampliar el arco de representación hacia áreas como ser: trabajadores de centros de distribución, empleados de depósitos, los encargados de la carga y descarga de vehículos, entre otros. Los conflictos se sucedieron debido a que estos trabajadores ya se encontraban bajo representación gremial y lo que se sucedió fue la cooptación de los mismos y la sustitución de la gestión gremial.

En el desarrollo de esta estrategia de expansión sindical hacia la captación de trabajadores de otros gremios ha resultado de vital importancia el vínculo político con el PE y con el MTEySS que abrieron el espacio al conflicto por encuadramiento y tomaron una posición positiva a favor de Camioneros. "Como resultado, se estima que durante el periodo 2003-2007, esta estrategia le permitió al sindicato de camioneros incorporar alrededor de 22.800 nuevos trabajadores" (Benes, Fernández Milmanda, 2012: 43).

³⁴ Argentina entraba en default o cesación de pago de la deuda externa en enero de 2002 tras la crisis económica e institucional de 2001. La deuda, que superaba los 191.000 millones de dólares, fue reestructurada en 125.283 millones. Al momento de la salida de la convertibilidad representaba el 113 por ciento del PIB, en 2005 el 72,4 por ciento. La reestructuración del pago de la deuda externa significó un punto de inflexión en la economía argentina y para el gobierno kirchnerista.

Moyano vs. Lavagna

A lo largo del año 2005 se sucedieron incómodas diferencias entre la CGT y el Ministro de Economía, Roberto Lavagna. La causa de las mismas se fundamentaba en reclamos de incremento salarial y por un aumento en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias por parte de la Central sindical.

Desde el Palacio de Hacienda aseguraban que un intento de ajustar salarios por inflación podría generar un descontrolado aumento de precios. En respuesta, Moyano situaba a Lavagna del lado de los que "forman parte del discurso de los gurúes del neoliberalismo, con Cavallo a la cabeza" (Página 12, 16/7/2005). "No podemos repetir la historia de los 90, cuando la economía crecía muy fuerte, pero había cada vez más pobres, más desocupados y más endeudamiento" (La Nación, 25/3/2005). Para los empresarios, particularmente los supermercadistas, el incremento de salarios era el elemento responsable del aumento de los precios de la canasta básica. La CGT replicaba "de ninguna manera podemos aceptar la pretensión de querer hacer creer que los salarios producen inflación" (La Nación, 17/6/2005).

Moyano contaba con el respaldo de la CTA de De Gennaro y la organización piquetera comandada por Luis D'Elía, quienes acompañaron las demandas y rechazaron ajustar los salarios a los incrementos de productividad. Mientras que la posición de Lavagna era defendida por el ex presidente Duhalde y desde el sector de "los gordos" representado por Susana Rueda.

Para poner coto a la disputa, fue necesaria la intervención personal del presidente Kirchner, quien buscó refrenar el enfrentamiento e intentar "moderar las expectativas" (Página 12, 13/3/2005). Si bien era cierto que para Kirchner la puja salarial y distributiva era parte deseable del conflicto gremial, debía tener un cauce congruente con la proyección de la política económica del gobierno. La decisión de Moyano fue acatar la directiva de Kirchner y acompañar el curso del modelo nacional. La CGT "se encolumnará con el Gobierno para impedir que frustren el derecho de los argentinos a tener un país mejor" (La Nación, 17/6/2005).

5. La recuperación de la calle

Para la asunción de Kirchner en 2003 aún retumbaba el cacerolazo que había llevado a la caída del gobierno de Fernando de la Rúa en diciembre de 2001. En palabras de Cheresky (2008:25) "fue la expresión característica de una activación social no convocada ni encuadrada por líderes y organizaciones, y que ilustran una vocación de la ciudadanía actual a la (...) presencia pública (...) La autonomía ciudadana se expresó (...) como rechazo más generalizado a la representación política existente".

Era la implosión de la crisis de legitimidad y el quiebre de los lazos de representación política tradicionales –partidarios y sindicales- fruto de las transformaciones que se habían dado desde la década del 90. La discusión y el conflicto social volvían a manifestarse con fuerza y consagraban una nueva configuración del espacio público. La ciudadanía volvía a manifestarse en las calles tras un periodo de despoltización impulsado desde el Estado. Durante el gobierno de Menem se da un proceso de desinterés por la cosa pública y una exaltación de lo privado. La era del individualismo y la indiferencia por la política tuvo su fin en diciembre de 2001 y se manifestó en la calle y al ruido de las cacerolas. Movilización y ocupación del espacio comandado por nuevos actores que se habían hecho del lugar vacío logrado a través del proceso de desindicalización. La desintegración del entramado social y laboral que se había producido resultó en la conformación de nuevas identidades políticas "en tensión y confrontación con las estructuras políticas, organizativas y territoriales del partido justicialista" (Iglesias, 2011: 128). Los nuevos agentes de acción política que se presentan en el espacio público provenían de diferentes tradiciones de lucha popular, tanto del sindicalismo como de partidos políticos de izquierda. Si bien la cuestión de la representación laboral había sufrido un corrimiento, de la discusión acerca del sector formal de los trabajadores hacia la discusión respecto a los sectores de trabajadores informales en aumento y los desocupados. "En este contexto, pareció que la iniciativa había sido ganada por las organizaciones de desempleados que protagonizaron masivas manifestaciones callejeras" (Etchemendy, Collier, 2008:146). Según Svampa (2008) las nuevas

formas de acción colectiva y de movilización de desocupados coparon el escenario social y político del país fundamentalmente durante el año 2002.

Por tanto, el control del espacio público por parte del Estado fue uno de los principales problemas a los que se enfrentaba el nuevo gobierno. La cuestión giraba en torno al posicionamiento del mismo frente a los grupos piqueteros y la recuperación del control de la calle, tanto en su capacidad de generar poder simbólico como en su dimensión de autoridad pública.

La incorporación de las organizaciones piqueteras y la canalización del conflicto sindical

Cuando Kirchner llegó al Poder Ejecutivo Nacional, el espacio público se encontraba dominado por las organizaciones piqueteras cuya metodología de protesta rondaba los límites de lo institucional. Desde el gobierno la situación se leía en términos de corolario de la fragmentación y crisis producto de las políticas de la década del 90. El poder de Kirchner no se sustentaba en la estructura partidaria ni sindical, sino en la opinión pública y el conflicto permanente en el espacio público cuestionaba su capacidad de gobernabilidad. El Estado debía lograr “integrar, cooptar y disciplinar a las organizaciones piqueteras, pero evitando la represión abierta y sistemática que la propia sociedad rechazaba” (Svampa, 2008:6). La autoridad presidencial debía garantizar el orden público y el derecho a la libre circulación frente a la protesta piquetera.

La posición de no reprimir de Kirchner era clara y en términos discursivos convocaba a la “normalidad”, a alcanzar el orden del campo político y social de manera *organizada*. Con tal objetivo y tomando en cuenta la heterogeneidad ideológica y la tendencia a la fragmentación de parte de las organizaciones de protesta, el gobierno resolvió moverse por medio de una doble estrategia, por un lado impulsar la incorporación de grupos piqueteros a la órbita del Estado. Por el otro, desactivar la confrontación abierta de las organizaciones piqueteras por medio de la judicialización y estigmatización del choque callejero. En función de ello, apelaba a la reapertura de la discusión en torno a la legitimidad de la metodología

de protesta del corte de ruta como de la discrecionalidad del manejo de los subsidios estatales.

La intención de institucionalizar la relación del Estado con las organizaciones piqueteras fue aceptada desde el inicio por parte de agrupaciones de origen sindical y partidario como los casos de la Federación de Tierra y Vivienda y la organización Barrios de Pie. Ambas organizaciones interpretaban la estrategia del nuevo gobierno en clave de la suspensión del vínculo del Estado argentino con el capital financiero internacional. “La idea es que suceda un fenómeno como el que impulsó Perón, quien no creó los sindicatos, pero los integró al peronismo. Creemos que ahora hay una oportunidad parecida: existe un movimiento de masas que en los últimos años encabezó la resistencia al modelo neoliberal y es el tiempo de integrarlo al proceso político” (Página 12, 3/8/2003).

De modo que por medio del llamado al diálogo y al trabajo conjunto, el gobierno emprendió un camino hacia la reconstrucción de los lazos de representación y la conformación de un espacio político *transversal*. El lanzamiento de una serie de programas³⁵ desde el Ministerio de Economía y de Desarrollo Social y la posibilidad de conformar una corriente kirchnerista por fuera de la estructura partidaria del peronismo facilitaron la conformación de frentes sociales de intervención política. Los convenios aprobados por el Gobierno, sobre propuestas presentadas por organizaciones no gubernamentales –muchas de ellas vinculadas al movimiento piquetero– estaban dirigidas a la promoción de empleo, de micro-emprendimientos de herrerías y de huertas, entre otros. (Página 12, 14/8/2003)

En respuesta, la Federación de Tierra y Vivienda, el Movimiento Barrios de Pie, el Frente Transversal Nacional y Popular y el MTD Evita conformaron el Frente Patria para Todos y convocaron al campo popular a acompañar el proyecto del gobierno nacional mediante la divulgación del documento “La Hora de los Pueblos” y a generar un posicionamiento consensuado en referencia al gobierno nacional fundado en la voluntad de *reconstituir el movimiento nacional a fin de afianzar la unidad de*

³⁵ Se trata de los programas nacionales: “Plan Nacional de Seguridad Alimentaria - El hambre es más urgente” de asistencia alimentaria, “Manos a la obra” en promoción de la construcción de viviendas sociales y el “Plan arraigo” en fomento de emprendimientos productivos.

*concepto y acción entre el gobierno y las fuerzas populares*³⁶. Dentro de este marco y la transformación en la dinámica de la protesta social, “los movimientos filokirchneristas se reposicionaron como los herederos de un proceso mayor, cuya tarea actual era no sólo organizar a los sectores populares, sino constituirse en su representación política” (Pérez, Natalucci, 2010:102) convocando:

“...a cerrar filas en torno al ideario de la justicia social, el desarrollo económico y la democracia participativa. [Se instaba a] la conformación de un gran frente social y político capaz de representar y canalizar el protagonismo de las mayorías populares, que recupere para el pueblo las instituciones de la República, acabe con la impunidad y la corrupción y nos permita construir un país más justo y solidario, por el que soñaron y dieron su vida los treinta mil desaparecidos y tantos otros luchadores populares que nos precedieron” (Documento “Diez puntos para la unidad de las fuerzas populares”, Buenos Aires, diciembre de 2004).

Por medio de la institucionalización de la protesta social³⁷ y la incorporación de las demandas sociales de manera “organizada”, el gobierno de Kirchner consiguió re-significar la confrontación política de un modo instrumental garantizando gobernabilidad y control del espacio público. “La expectativa de esta política es (...), en términos propiamente políticos, mostrar una apertura al diálogo, incorporando a dirigentes de la protesta a funciones de gobierno y aislando a los sectores piqueteros más disruptivos” (Cheresky, 2008:191).

Por parte de la CGT, la recuperación de la calle equivalía a salir de la era de la desindustrialización al que los había llevado el *dialoguismo* de la era menemista y

³⁶ Documento Diez puntos para la unidad de las fuerzas populares, diciembre de 2004 (Pérez, Natalucci, 2010:102).

³⁷ A pesar de los esfuerzos, la conformación del Frente Patria para Todos no alcanzó sus objetivos debido a cuestiones internas y de la lógica política general. Por un lado, más allá de la reivindicación nacional y popular, las diferencias ideológicas y de tradición política entre las organizaciones eran importantes. La fundamental se asentaba sobre la apropiación de la identidad peronista; si bien esta era reivindicada, no todas las organizaciones estaban convencidas de construir su interpelación pública a partir de aquella. Por otro lado, sus acciones se limitaron a la difusión de documentos de tinte más reclamativo que propositivo; con lo cual los márgenes de acuerdo respecto de las estrategias de intervención eran más bien difusos. Asimismo, no habría que descartar los inconvenientes provocados por las disputas personales entre los dirigentes en relación con la consolidación del FPT. Por último, su objetivo de constituirse en una coalición política que disputara con el PJ la hegemonía en el espacio kirchnerista era compleja y se vinculaba con el armado electoral del propio Kirchner (Natalucci, 2008). Más allá de ello, la experiencia del Frente propició el acercamiento entre organizaciones con afinidades en términos de tradiciones e identidades que favorecieron la constitución de otros dos: el Movimiento Evita en mayo de 2005 y el Movimiento Libres del Sur en abril de 2006.

reposicionar a la Central como el principal depositario de la representación de los trabajadores y de la huelga como metodología de lucha. Para ello resultaba imperioso conseguir la reunificación de la CGT –dividida desde el año 2000-.

Como hemos relatado anteriormente, el conflicto suscitado entre Moyano y Cavalieri (de manera correlativa con la pulseada por la conducción de la CGT entre el sector de Moyano y los Gordos) por la representación de los trabajadores de Carrefour no sólo dejó en claro la reaparición del conflicto sindical en el espacio público, sino que permitió a los camioneros de Moyano demostrar su capacidad de disrupción y movilización. El apoyo por parte del gobierno hacia Moyano permitió a la FNTC incrementar considerablemente el número de afiliados y convertirse en vector de la conflictividad laboral. Al mismo tiempo, el apoyo de los gremios afines a la orientación que iba tomando el gobierno y la indiferencia del gobierno hacia los sectores de la CGT oficial hicieron que no resultase sorpresiva la unificación de la CGT bajo el ejercicio de la secretaria de Moyano³⁸. Desde el Poder Ejecutivo se esperaba “que las organizaciones sindicales *tengan presencia en la calle* y que disputen el espacio público con las organizaciones piqueteras. Esa presencia estaba garantizada con Hugo Moyano” (Iglesias, 2013:14). Por medio de la concentración de poder en manos de Moyano, el gobierno consolidaba el vínculo de la CGT en el sistema político y la capacidad de maniobra política de la misma³⁹.

Hacia mediados de 2004 el sector sindical dirigido por Moyano contenía la capacidad de confrontación, movilización y paralización en el espacio público. La recuperación económica, la reapertura del espacio institucional para la discusión laboral y la mirada benévola del gobierno favorecieron la recuperación de la acción gremial. Según afirman Sebastián Etchemendy y Ruth Collier, hacia fines de 2004 e inicios 2005 “la conflictividad laboral aumentó un 50 por ciento por encima del nivel de 2000. No obstante, el conflicto se restringió a ciertas condiciones en el mercado de trabajo: disputas salariales (un aumento del 200 por ciento entre 2000 y 2005) y

³⁸ Como ha sido desarrollado en el apartado 3.3., la unificación de la CGT no se consiguió de la noche a la mañana ni tampoco Moyano fue elegido por votación unánime.

³⁹ El secreto a voces decía que “La CGT se ha adecuando a la naturaleza del desarrollo político que hay en el país y es un puntal, produce el conflicto y después le da la solución al Presidente. Negociación pura” (La Nación, 09/04/2006).

sobre condiciones de trabajo (un aumento del 17 por ciento) fueron los únicos dos tipos de conflicto que aumentaron con respecto a 2001. En tanto, (...) las huelgas fueron de naturaleza económica, con muy pocas huelgas políticas. Tanto la CGT (aliada con el gobierno) como la más progresista CTA se abstuvieron de convocar a huelgas generales contra la administración de Kirchner". (Etchemendy; Collier, 2008:157).

Reflexiones finales

La crisis de legitimidad en la que se encontraba el país al momento de asunción de Kirchner pedía a gritos la reconstrucción del lazo ciudadano y de representación, la necesidad de orden institucional y una vuelta a la normalidad. Kirchner supo capitalizar el margen de libertad política con el que contaba (propio del *outsider* que no posee respaldo organizacional propio) y sorprendió con la espectacularidad de sus decisiones y una acción de gobierno vertiginosa. Logró reconocer los elementos de la crisis y se lanzó de lleno a la tarea de redefinir el espacio político e institucional. Los cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas y el recambio de la Corte Suprema de Justicia, el enjuiciamiento a los responsables por la violación de los derechos humanos durante la última dictadura militar y el inicio de una política de la memoria fueron decisiones que transgredieron acuerdos corporativos, intereses y compromisos con la dirigencia política tradicional. Era el comienzo de un gobierno cuya acción se apoyó en la construcción de un lazo directo con la ciudadanía.

La orden del día exigía respeto por la institucionalidad cuya respuesta vino de la mano de la política de la transversalidad. La transversalidad significaba la reconstrucción del juego legislativo como base para la reconfiguración del lazo de representación y el buen funcionamiento institucional. Por medio del llamado a la pluralidad de voces y el acuerdo entre diferentes lineamientos políticos el nuevo gobierno alcanzó la reagrupación de diversas fuerzas, desde la UCR a las organizaciones de derechos humanos y agrupaciones piqueteras. Y así demostrar su capacidad para redefinir el espacio político y consolidar una base de legitimidad propia. Mientras que la implementación de una fuerte política de contención y la reapertura del espacio para el conflicto laboral daba comienzo a la recomposición del entramado social. La recuperación de los niveles salariales y la reaparición del rol del sindicato resultaron elementos estratégicos en la conformación de la política laboral y económica.

Desde principios de 2004 el espacio abierto para la lucha sindical fue copado por el dirigente Hugo Moyano. De procedencia peronista, dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, opositor acérrimo al neoliberalismo y defensor de un Estado fuerte e intervencionista, otorgo su apoyo al gobierno de Kirchner prácticamente de forma inmediata: "este Gobierno está haciendo bastante, bastante parecido a lo que uno piensa", con este decreto [aumentos salariales establecidos por decreto desde julio de 2003] dio paso al "descongelamiento de los salarios" y al inicio de "una nueva política salarial y laboral" (Hugo Moyano para La Nación, 30/12/2003). Moyano contaba con un cuantioso número de representados y una gran capacidad de presión basada en el poder de la provocación (amenaza), real y/o potencial, de inmovilizar toda actividad relacionada con el servicio de transporte y, por tanto, de paralizar la cadena de distribución de productos y servicios del país. Este sector fue beneficiado por la transformación económica de los años 90 en el marco de la economía global, no sólo por el crecimiento de la organización de los trabajadores del transporte sino que supuso una modificación en el balance de poder del mapa sindical y el posicionamiento de Moyano como principal referente.

Durante la presidencia de Kirchner, la recuperación de la acción sindical y el apoyo de Moyano han sido piezas clave en la estrategia para constituir consenso social y ampliar los espacios de liderazgo desde un juego de favores y concesiones mutuas. La alianza entre ambos actores permitió tanto el establecimiento de un "techo" para la concreción de paritarias anuales y la resolución de conflictos inter-sindicales por el encuadramiento de los trabajadores, como el acuerdo de subsidios y la presencia indiscutible de Moyano en el espacio público. En el caso de las convenciones colectivas, el tope que debían alcanzar los acuerdos sectoriales era anunciado por Moyano a principios de cada año, en concordancia con el nivel de inflación anual estimado desde el gobierno. El sindicato de camioneros actuó, en acuerdo con el gobierno, como caso testigo de negociación colectiva. La alianza y el apoyo fue concomitante y la foto del acuerdo salarial de los camioneros en la Casa Rosada fue elocuente. Por un lado, Kirchner disfrutó mostrándose como el hacedor de los acuerdos salariales. Por el otro, el jefe de la CGT se regodeó de las ventajas

que le concedía su estrecho vínculo con el presidente. En tanto, el nivel general de los conflictos laborales aumentó, aunque se mantuvo limitado a las disputas salariales y a las condiciones de trabajo dentro de un marco institucional de diálogo entre representantes sindicales, patronales y del Estado. El elemento decisivo fue el apoyo de Camioneros y la CGT.

Lo mismo puede decirse respecto a la necesidad del gobierno nacional por "controlar" el conflicto de piquetes y cortes de calle. El espacio público se encontraba dominado por las agrupaciones piqueteras -emergentes de la desintegración social, con alta heterogeneidad ideológica y tendencia a la fragmentación- que hicieron propio el espacio de la lucha sindical vacante en base a un gran poder de convocatoria y disrupción. La estrategia del gobierno consistió en integrar, cooptar y disciplinar a las organizaciones piqueteras, evitando cualquier síntoma de represión y apoyado en la reconstitución del poder sindical. Desde la CGT se jugó un doble papel, por un lado en la promoción de la protesta y la movilización en base a las disputas salariales, y por el otro, moderar los reclamos a fin de mantener el alineamiento y las buenas relaciones con el gobierno. Como hemos señalado en la investigación, el conflicto se traspasa de las agrupaciones piqueteras a las organizaciones sindicales bajo el liderazgo de Moyano como "garantía" de contención del mismo en el margen de acción dispuesto por el PE.

El gobierno de Kirchner ha concentrado sus esfuerzos en tratar el conflicto en el espacio público a partir del reconocimiento de la legitimidad de los reclamos, tanto por parte de las agrupaciones piqueteras como por parte de las organizaciones gremiales, ampliando el margen de tolerancia social a las protestas. No obstante, es preciso mencionar también la discrecionalidad del uso de la confrontación política en el espacio público como fue el caso del boicot contra la petrolera Shell. El gobierno logró reconfigurar el espacio de lucha y la disrupción en el espacio público, pero fue objetado por la opinión pública en más de una oportunidad. Se incorporó a las agrupaciones piqueteras que se hicieron eco del llamado en clave nacional y popular y con mayor tendencia a la institucionalización. Mientras que, a través de la judicialización del conflicto y la estigmatización social, se promovió el desgaste y

debilitamiento de la actividad y la convocatoria de las organizaciones ligadas a partidos de izquierda y agrupaciones independientes.

Para finalizar creemos poder afirmar que el estilo personal y el crédito en la ciudadanía demostraron ser las bases del poder y liderazgo de Kirchner. Un estilo que logró "instituir o redefinir la identidad política que pretendía liderar" (Cheresky, 2008:37) con la consolidación del kirchnerismo. Al tiempo que el establecimiento de un juego de alianzas y adhesiones con Moyano no solo posibilitó el resurgimiento del sindicato como actor central del entramado político y la unificación de la CGT, sino que permitió llevar adelante la consolidación de un nuevo ideario de país. Kirchner dio por terminado su mandato presidencial con un índice de popularidad de alrededor del 65%, líder del nuevo sujeto político kirchnerista y jefe del Partido Justicialista. Por el lado de Moyano, aunque a cargo de la CGT y del control del espacio público, no logró concretar sus aspiraciones partidarias de convertirse nuevamente en columna vertebral del peronismo. Aunque aliados y compañeros, el espacio para la reivindicación sindical nunca estuvo abierto al interior del kirchnerismo.

De cualquier modo sigue siendo y será imprescindible no dejar de lado el principal capital detrás del poder de Moyano: la conducción de Camioneros y, por tanto, la capacidad de paralizar el país.

Fuentes bibliográficas

Abós, Álvaro. *La columna vertebral, sindicatos y peronismo*, Buenos Aires, Legasa, 1983

Beliz, Gustavo. *CGT, el otro poder*, Buenos Aires, Planeta, 1988

Benes, Enzo; Milmanda, Belén Fernández. *El nuevo liderazgo sindical en la Argentina postneoliberal: el caso del gremio de camioneros*. Desarrollo Económico, vol. 52, no 205, 2012

Benetti, María Gabriela, *Estado y sindicatos en Argentina: en tiempos de neoliberalismo (1989-1999)*, Tesis de Doctorado en Ciencia Política, Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Ciencia Política y RR.II., 2013

Etchemendy, Sebastián y Collier, Ruth, *Golpeados pero de pie. Resurgimiento sindical y neocorporativismo segmentado en la Argentina, 2003-2007*, Postdata, N° 13, 2008

Bunel, Jean. *Pactos y agresiones, el sindicalismo argentino frente al desafío neoliberal*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1992

Calvo, Ernesto. *Argentina, elecciones legislativas 2005: consolidación institucional del kirchnerismo y territorialización del voto*, Revista de Ciencia Política, 2005

Campione, D., Rajland, B., & Caetano, G. *Piqueteros y trabajadores ocupados en la Argentina de 2001 en adelante: novedades y continuidades en su participación y organización en los conflictos*. Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina, 297-330, 2006

Cheresky, Isidoro. *¿Hacia una nueva ciudadanía en la Argentina?* Nueva sociedad vol. 159, p. 76-86, 1999

Cheresky, Isidoro. *Autoridad política debilitada y presencia ciudadana de rumbo incierto*, en revista Nueva Sociedad n°179, 2002

Cheresky, Isidoro. *Cambio de rumbo y recomposición política en Argentina – Néstor Kirchner cumple un año de gobierno*, en revista La Chronique des Amériques n° 17, Juin, España, 2004

Cheresky, Isidoro. *Poder presidencial, opinión pública y exclusión social*, Buenos Aires, Manantial, 2008

Dalle, P.; Boniolo, P.; Sautu, R.; Elbert, R. *Manual de metodología. Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología*, CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2005

Doyon, Louise. *Perón y los trabajadores. Los orígenes del sindicalismo peronista, 1943-1955*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006

Frenkel, Roberto. *Globalización*. Revista de la CEPAL, vol. 80, p. 41, 2003

Godio, Julio. *La Alianza*, Buenos Aires, Grijalbo, 1998

Gómez, Marcelo. *Un modelo de análisis para entender las transformaciones del sindicalismo durante los 90 en la Argentina*. Revista del Programa de Investigaciones sobre Conflicto Social–ISSN, vol. 1852, p. 2262, 2009

Grosso, Alejandro. *Los dos príncipes: Juan D. Perón y Getulio Vargas*, Villa María, Eduvim, 2009

Gutiérrez, Ricardo. *Desindicalización y cambio organizativo del peronismo argentino, 1982-1995*. Ponencia presentada en el XXI International Congress of the Latin American Studies Association, llevado a cabo en la ciudad de Chicago del. Vol. 24. 1998

Habermas, Jürgen. *Problemas de legitimación en el capitalismo tardío*, Madrid, Cátedra, 1999

Iglesias, Esteban. *Modificaciones en el vínculo entre partidos y movimientos en la Argentina de comienzos del XXI*, en revista *STUDIA POLITICA* n° 25, Córdoba, 2011/2012

Iglesias, Estaban. *Kirchnerismo y sindicalismo peronista. La persistente desarticulación de un vínculo en un contexto de revitalización sindical. Rasgos y perspectivas de la nueva izquierda en América del Sur. Partidos políticos y movimientos sociales*. Rosario, Cap. 6, 2013

James, Daniel. *Resistencia e Integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina 1946-76*, Bs. As., Sudamericana, 1990

Jiménez Becerra, A.; Torres Carrillo, A. (comp.). *La práctica investigativa en ciencias sociales*, DCS, Departamento de Ciencias Sociales, UPN, Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, Colombia. 2006

Kirchner, Néstor. *Discurso de asunción presidencial*, Congreso Nacional, Buenos Aires, 2003

Little, Walter. "La organización obrera y el Estado peronista, 1943-1955" en Juan Carlos Torre (comp.) *La formación del sindicalismo peronista*, Bs. As., Legasa, 1988

López, Facundo. *Menem y la C.G.T., ¿Acuerdos extra-institucionales?* En revista Instituciones y procesos gubernamentales X, n°14, Buenos Aires, 2011

Martuccelli, D.; Svampa, M. *La plaza vacía. Las transformaciones del peronismo*. Buenos Aires, Losada, 1997

Merino, Gabriel. *El movimiento obrero organizado, la crisis de 2001 y el gobierno de Duhalde. El caso de la CGT disidente*. Sociohistórica. Cuadernos del CISH, 2011

Natalucci, A., "De los barrios a la plaza. Desplazamientos en la trayectoria del Movimiento Evita" en Pereyra, S.; Pérez, G.; Schuster, F. (Editores), *La Huella Piquetera, Avatares de las organizaciones de desocupados después de 2001*, Editorial Al Margen, Buenos Aires, 2008

Novaro, Marcos. *Representación y liderazgo en las democracias contemporáneas*, Rosario, Homosapiens, 2000

Novick, Marta. *¿Emerge un nuevo modelo económico y social? El caso argentino 2003-2006*. Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo (RELET), vol. 11, no 18, p. 53-78, 2006

Novick, Marta. *Nuevas reglas de juego en la Argentina, competitividad y actores sindicales*, 2001

Oszlak Oscar, O'Donnell Guillermo: *Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación*. Publicado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Buenos Aires, Documento G. E. CLACSO/ Nro. 4, 1981

Pacecca, María Inés. *Legislación, migración limítrofe y vulnerabilidad social*. VI Jornadas sobre Colectividades, 1998

Palomino, Héctor. *Argentina: dilemas y perspectivas del movimiento sindical*. Nueva Sociedad, vol. 83, p. 89-102, 1986

Pereyra, S.; Svampa, M. *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*, Buenos Aires, Biblos, 2003

Rial, Noemí. *La crisis mundial y la experiencia argentina*. Revista de Trabajo, vol. 5, no 7, 2009

Santos, Damián. *Saúl Ubaldini (1936-2006): una historia de resistencia y lucha del sindicalismo peronista*. Revista Forjando, 2012

Soca, F. *Cooperación e intercambio: El caso de Néstor Kirchner y Hugo Moyano*, Doctoral dissertation, Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 2011

Svampa, Maristella. *Argentina: una cartografía de las resistencias (2003-2008)*, Osal 24, 2008

Torre, Juan C. *Los sindicatos en el gobierno: 1973-76*, Bs. As., C.E.A.L./B.P.A., N° 30, 1989

Fuentes Hemerográficas

Página 12. Desde diciembre de 2002 a Octubre de 2007

LA NACIÓN. Desde diciembre de 2002 a Octubre de 2007

CLARIN. Desde diciembre de 2002 a Octubre de 2007